

SEPTIEMBRE 14 DE 1932

60ª REUNION — Continuación de la 39ª SESION ORDINARIA

PRESIDENCIA DE LOS DOCTORES JUAN F. CAFFERATA, HECTOR S. LOPEZ
Y AUGUSTO BUNGE

DIPUTADOS PRESENTES: Abalos Próspero, Acosta Abel, Agüero Santos, Aguirrezabala Miguel A., Ahumada Luis Alberto, Alonso Alfredo J., Amodeo Aurelio F., Andreis Fernando de, Antelo Mario, Aráoz Ernesto M., Aráoz José Ignacio, Argonz Joaquín, Becerra Eugenio A. (h.), Bermúdez Manuel A., Besasso Domingo, Biancofiore Rafael, Bogliolo Rómulo, Bordabehere Enzo, Bosano Ansaldo Daniel, Briuolo Miguel, Bruchou Eduardo, Buira Demetrio, Bunge Augusto, Bustillo José M., Buyán Marcelino, Cafferata Juan F., Cárcano Miguel Angel, Carreras José, Castellanos José D., Castiñeiras Alejandro, Castro Felipe, Colombres Carlos G., Contte José A., Cornejo Arias Víctor, Corominas Segura Rodolfo, Coronel Carlos, Cortés Arteaga Alberto, Costa Méndez Nicanor, Costanti Gerardo, Courel Carlos D., Dávila Miguel S., Dickmann Adolfo, Dickmann Enrique, Duhau Luis, Escobar Adrián C., Ferreira Antenor R., Fresco Manuel A., Frías Silva Raúl, Ganza Marcelino, Ghioldi Américo, Giménez Angel M., Giusti Roberto F., Godoy Raúl, Gómez Bernán F., González Benjamín S., González Guerrero Manuel, González Maseda Manuel, González Valentín, Groppo Pedro, Guglielmelli Aquiles M., Harispe Albino H., Herrera Bruno J., Inda Rufino, Iribarne Alberto, Lamesa Juan B., Lazo Plácido C., Lima Vicente Solano, López Héctor S., Loredo José, Loyarte Ramón G., Luján Abdón P., Maglione Francisco I., Magris Amleto, Manacorda Carlos, Mancini Rafael, Martella Julio C., Martínez Erasmo, Martínez José Heriberto, Mattos Luis María, Mayo Ramón, Mesone Ricardo N., Molina Serapio, Moreira Alejandro E., Moret Carlos (h.), Morrogh Bernard Juan F., Mosset Iturraspe Mario, Mouchet Enrique, Mouesca Eduardo, Moyano Rodolfo, Navello Miguel B., Nigro Juan, Noble Julio A., Noble Roberto J., Oddone Jacinto, Ortiz Basualdo Samuel, Palacín José, Palacín Manuel, Palacín Pedro, Palacín Benjamín, Palisa Mujica Arturo, Palmeiro José, Parera Gregorio, Parodi Misael J., Pena José Luis, Pereira Clodomiro, Pérez Leirós Francisco, Pflieger José E., Pietranera Bruno J., Pinedo Federico, Pintos Angel, Pomponio Vicente E., Pressacco Juan P., Pueyrredón Carlos A., Quiroga Félix, Radio Pedro, Repetto Nicolás, Rocha Arturo da, Rojas Marcos E., Ruggieri Silvio L., Ruiz Guíñazú Jacinto, Saggese Angel, Salas José Raquel, Salcedo Saturnino, Santillán Enrique, Schoo Lastra Dionisio, Sierra Bernardo, Simón Padrós Juan, Solari Juan Antonio, Solís Rogelio J., Speroni Daniel C., Spinetto Alfredo L., Tourrés León P., Uriburu Francisco, Vega Abraham de la, Vecchi Adolfo A., Vidal Baigorri José, Vionnet Rodolfo L., Zalazar Altamira Benjamín, Zarazaga Marcial J., Zerde Justiniano de la; AUSENTES, CON LICENCIA: Amadeo y Videla Daniel, Carús Agustín J., Grisolia Luis, Vignart Uberto F.; CON AVISO: Garayalde José María, Pascarelli Miguel, Rodríguez Pinto Domingo, Sellarés Avelino, Taboada Mora Cipriano; SIN AVISO: Albarracín Belisario, Calderón Osvaldo M., Carreras Ernesto L. de las, Castiglioni Eduardo, Espil Alberto, Fernández Damián, Herráiz Pascual.

SUMARIO

- 1.—Manifestaciones en minoría.
- 2.—Indicación del señor diputado Moreira para que se dé trámite a los asuntos entrados que no requieran fundamento verbal.
- 3.—Asuntos entrados:

I.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre rebaja gradual del derecho aduanero adicional de emergencia del 10 por ciento.

II.—Comunicaciones oficiales varias.

III.—Comunicación del Honorable Senado.

IV.—Despachos de comisión.

V.—Peticiónes particulares.

VI.—Proyecto de ley del señor diputado Pueyrredón y otros, declarando monumento nacional al edificio del antiguo Cabildo de la ciudad de Buenos Aires.

VII.—Proyecto de ley del señor diputado de la Vega, reproducido, acordando pensión a la señora Amalia Nougués de Oromí Escalada.

VIII.—Proyecto de ley del señor diputado Mosset Iturraspe sobre res-

cisión de contratos de arrendamientos agrícolas.

IX.—Proyecto de ley del señor diputado Pressacco y otros, sobre reformas a la ley de prenda agraria.

X.—Proyecto de ley del señor diputado Cafferata, reproducido, sobre jubilación del personal docente de las escuelas provinciales, municipales y particulares.

XI.—Telegrama enviado a la Honorable Cámara de Diputados del Uruguay, con motivo de la reanudación de las relaciones diplomáticas.

4.—Manifestaciones del señor diputado Aguirrezabala respecto de la oportunidad de fundar un proyecto de resolución.

5.—Información solicitada por el señor diputado Bordabehere.

6.—Incidencia relacionada con el orden de la labor de la Honorable Cámara.

7.—Termina la consideración del despacho de la Comisión de Legislación General en los proyectos de ley sobre reformas al Código de Comercio, en lo relativo a empleados de comercio.

8.—A moción del señor diputado Pueyrredón, se autoriza a la Comisión de Presupuesto y Hacienda a pasar a la Comisión de Legislación General un proyecto de ley sobre prórroga del plazo de obligaciones hipotecarias.

9.—Moción del señor diputado Costa Méndez, aprobada, acordando preferencia al despacho de las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Obras Públicas, sobre ley nacional de vialidad.

10.—Moción del señor diputado Argonz, para que el despacho sobre sufragio femenino, sea tratado como primer asunto en la sesión de mañana.

11.—Indicación del señor diputado Pena para que se dé trámite a los asuntos entrados.

12.—Asuntos entrados:

XII.—Mensaje del Poder Ejecutivo contestando el pedido de informes relacionados con la morato-

ria sancionada por la provincia de Santa Fe.

13.—Consideración del despacho de la Comisión de Justicia en el proyecto de ley sobre protocolización de documentos.

14.—Consideración del despacho de la Comisión de Justicia, en el proyecto de ley sobre validez de certificados del Registro de la Propiedad.

15.—Moción del señor diputado Pueyrredón para que se trate de inmediato el despacho de la Comisión de Comunicaciones y Transportes sobre concesión a la empresa del Ferrocarril del Sud para la construcción y explotación de varias líneas en la provincia de Buenos Aires.

—En Buenos Aires, a catorce de Septiembre de 1932, siendo la hora 15 y 30:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Presidente (Cafferata). — Señores diputados: es la hora reglamentaria y hay 66 señores diputados en el recinto. En la casa hay número.

Sr. Groppo. — Podríamos esperar un cuarto de hora.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Cafferata). — Habiendo asentimiento, se esperará un cuarto de hora.

—Se sigue llamando.

2

INDICACION

—A la hora 15 y 39:

Sr. Presidente (Cafferata). — Continúa la sesión, con la presencia de 90 señores diputados.

Sr. Moreira. — Pido la palabra.

Como la sesión de hoy es continua-

5

INFORMACION

Sr. Bordabehere. — Pido la palabra. Desearía saber si ha tenido entrada el informe del señor ministro de hacienda, respecto a la moratoria de la provincia de Santa Fe.

Sr. Presidente (Cafferata). — La Secretaria informa que no ha tenido entrada.

Sr. Bordabehere. — Pido que se inserte en el Diario de Sesiones, cuando llegue.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Cafferata). — Habiendo asentimiento, así se hará. (1)

6

INCIDENCIA

Sr. Dickmann (E.). — Pido la palabra.

Sr. Groppo. — Yo entiendo que ayer, a raíz de mi moción, la Cámara pasó a cuarto intermedio para continuar hoy, inmediatamente, el estudio de la ley en discusión, es decir, la orden del día 35.

La Cámara daría la impresión de no haber comprendido el espíritu de mi moción, si hiciera otra cosa, por lo cual se debe continuar de inmediato la consideración de dicho asunto, a fin de que no se formulen mociones de preferencia, que desvirtúan el sentido de la resolución de la Cámara.

Sr. Presidente (Cafferata). — Es lo que corresponde.

Sr. Dickmann (E.). — Muy bien.

Sr. Aguirrezabala. — Quiero expresar que no ha sido mi intención poner inconvenientes a la consideración por parte de la Cámara del importante asunto que se está debatiendo. Yo me limité a hacer una consulta.

Sr. Groppo. — No me refería al señor diputado, sino que he tratado de impedir que se acoplen mociones de preferencia.

(1) Ver página 883.

7

EMPLEADOS DE COMERCIO

Sr. Presidente (Cafferata). — Continúa la consideración del despacho sobre reformas al Código de Comercio.

Sr. Vicchi. — Pido la palabra.

En la sesión de ayer, al pasarse a cuarto intermedio, yo estaba en el uso de la palabra, de manera que, reglamentariamente, continúo en el uso de ella.

Sr. Presidente (Cafferata). — Tiene la palabra el señor diputado.

Sr. Vicchi. — Decía en la sesión de ayer que, para los que juzgan los efectos de la ley que estamos estudiando, por sus consecuencias aparentes y no reales, la impugnación que formulamos al despacho puede aparecer, en cierto modo, en contra del espíritu de la reforma. Tal apreciación no sería sino una apreciación ligera, que creo poder perfectamente desvanecer. Y me interesa hacer algunos argumentos, para fijar claramente nuestra posición en este debate.

Al discutirse el apartado que la Cámara considera en este momento, en la sesión de ayer el señor diputado Dickmann nos hizo una alusión, en cierta forma caleidoscópica, a la legislación comparada, refiriéndose a algunas leyes vigentes de países latinoamericanos, como Perú y Chile, y también a la legislación italiana.

Sr. Bunge. — Me ha llamado la atención que los países citados como ejemplo sean los gobernados por una clase que no se ha caracterizado hasta ahora por su respeto hacia el movimiento obrero y a los derechos y a la vida de los trabajadores. Son, precisamente, los tres gobiernos más típicos, en cuanto a su carácter dictatorial y enemigos del movimiento obrero, que han acordado privilegios particulares a determinadas minorías.

Sr. Dickmann (A.). — La ley peruana, a que yo me he referido, no es del régimen dictatorial; data de cuando Perú tenía relativamente un go-

bierno como el de los demás países sudamericanos...

Sr. Bunge. — Con Leguía.

Sr. Vicchi. — No voy a tolerar más interrupciones, en el deseo de ser breve, aunque ellas no me molestan.

Sr. Bunge. — Pido disculpas.

Sr. Vicchi. — He estudiado, antes de concurrir a la comisión, el estado de la legislación comparada, y debo expresar, también, que desde hace mucho tiempo una de mis preocupaciones predilectas en el orden intelectual ha sido, precisamente, esta materia de la legislación obrera, porque entiendo que el progreso de esta rama del derecho podrá permitir la evolución pacífica y el perfeccionamiento del régimen social en vigor sin conmociones violentas.

Ahora bien, ¿cuál es el estado de la legislación comparada en la materia? Porque no es el caso de que sólo cite-mos disposiciones aisladas de las leyes, las más beneficiosas, y no las restrictivas. Afirmo que, con excepción de la ley italiana, el despacho de la comisión en su conjunto aventaja en sus efectos, y en mucho, a todas las demás leyes que rigen la materia, aun las de aquellos países de una evolución jurídica extraordinaria o más perfecta, como es el caso de algunas naciones europeas y de los Estados Unidos. Y en cuanto a la legislación italiana, el despacho de la comisión, que ya ha sido sancionado en parte por la Honorable Cámara, tiene disposiciones superiores en su alcance a esa misma legislación.

Por ejemplo, el régimen de las indemnizaciones para las enfermedades inculpables presenta esta situación: mientras en la ley italiana el primer mes se paga íntegramente y en los sucesivos se paga medio mes, por nuestro despacho se pagan mensualidades completas. Lo mismo ocurre con el régimen de las indemnizaciones en general que prevé el artículo 155, y también con el régimen que se refiere al preaviso, porque la legislación italiana establece tres categorías para el pago del preaviso, pero para los empleados de comercio en general a los que se refiere esta ley, por la indem-

nización y el sueldo que establece, la legislación italiana fija 15 días de preaviso para una antigüedad de cinco años, un mes para una antigüedad de 10 años y un mes y medio para una antigüedad superior, de manera que nuestra disposición aventaja también a la legislación italiana en ese sentido.

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que, cuando se introducen reformas legislativas, debe tenerse a la vista el régimen jurídico que ha imperado. Nuestra legislación anterior, es decir, la actual del Código de Comercio, ha sido sindicada, y con razón, como una legislación atrasada. No obstante sus deficiencias, es la que ha regido las relaciones contractuales de empleados y empleadores; no nos podemos apartar de un hecho cierto, de un hecho que deseamos modificar, pero que no podemos alterar en forma violenta sin poner en peligro una serie de relaciones de orden jurídico y de orden económico.

Niego que la alteración o modificación que proponemos cambie fundamentalmente los propósitos que la ley persigue. Insisto en que, dentro de nuestro derecho, la antigüedad no ha sido tenida en cuenta por la legislación comercial anteriormente. Y si queremos hacerla producir efectos es prudente que no consideremos que ella es un derecho adquirido, sino que la hagamos producir efectos con respecto al futuro.

Es oportuno también concretar cuáles son el alcance y los efectos de la modificación. Cuando sostenemos que deben reducirse al período de cinco años — y ya he explicado ampliamente las razones por qué lo creemos prudente, para evitar que la aplicación inmediata de la ley produzca una perturbación seria dentro de las relaciones económicas del comercio —, cuando proponemos que sea por cinco años, los efectos inmediatos serían los siguientes: el empleado tiene derecho a un mes de preaviso y tiene dos sueldos y medio de remuneración, es decir, que en caso de despido arbitrario tendrá tres meses y medio de indemnización. Si se compara esta situación con

el texto actual de la ley que establece un solo mes, se percibirá que indudablemente la reforma importa un gran progreso; pero hay algo más: como el texto del despacho de la Comisión de Legislación establece que una fracción superior a tres meses se computa como un año, transecurridos estos tres meses, los empleados que quedaran cesantes en una forma arbitraria tendrían derecho a dos meses de preaviso, porque pasados los cinco años no hay un mes de preaviso sino dos y a tres meses de sueldo, de donde tres meses después de la vigencia de la ley habría lugar a una indemnización correspondiente a cinco sueldos.

Sr. Dickmann (A.). — Conviene que dejemos, señor diputado, el método que usa, que sin quererlo está introduciendo una confusión. No se ocupe el señor diputado de la indemnización por el preaviso.

Sr. Vicchi. — ¿Cómo no me he de ocupar?

Sr. Dickmann (A.). — Es una indemnización condicionada. Debe referirse a la indemnización por despido.

Sr. Presidente (Cafferata). — Ruego al señor diputado que no interrumpa.

Sr. Vicchi. — No hago confusión. Tiene una perfecta relación, en primer lugar porque la rescisión arbitraria del contrato en la mayoría de los casos ha de producirse sin preaviso y, por lo tanto, requiere la sanción penal; y cuando así no ocurra, el empleado tiene dos horas diarias para tratar de obtener nuevo empleo; de manera que la ley establece la disposición prudente que evitará el perjuicio que el empleado va a sufrir por una medida arbitraria. Y tiene perfecta relación el argumento que hago con la consecuencia que deduzco del mismo.

Es conveniente puntualizar, insistiendo en un concepto que parece que no se hubiera percibido cabalmente en la sesión anterior. He dicho que la indemnización por preaviso, es decir el derecho a preaviso y la indemnización por despido, no rige solamente en el caso de rescisión arbitraria del con-

trato, porque si ese solo fuera el supuesto, me explico que hubiera el propósito de impedir la rescisión arbitraria por medio de una sanción fuerte; pero la ley contempla también muchos otros casos que no serían imputables al empleador, tales como la liquidación de un negocio, la liquidación forzosa, el cambio de firma y todos los demás supuestos que prevé la ley, que no están excluidos por la enumeración taxativa de causas legales que la ley reconoce para la rescisión del contrato.

Ahora bien; no nos oponemos al criterio de la comisión. Creemos que esta incorporación nueva como factor de apreciación dentro de nuestro derecho de la antigüedad, es una cosa útil; pero creemos que hay que irlo aplicando gradualmente. El tiempo irá restableciendo toda la escala que se ha previsto en la ley y la irá restableciendo en una forma gradual, sin saltos bruscos y sin producir perturbaciones. Y mientras tanto, ¿qué ocurrirá? Se irán organizando las cajas de previsión que, como expresé, es un proceso lento y que no podrá improvisarse, las cajas de previsión tendrán la ventaja de poner a cubierto al empleado ante los posibles riesgos de la insolvencia del empleador que perjudicaría en cierto modo la posibilidad del cobro de la indemnización y permitirá también la nueva organización de seguros, porque en la actualidad, como lo he afirmado en la sesión pasada, no habrá compañías aseguradoras que tomen a su cargo los riesgos de la indemnización por preaviso, porque no hay posibilidad, dentro de la organización actual, de calcular sus riesgos.

En consecuencia, al propiciar la reforma moderada, deseamos contribuir a sancionar una ley previsor y prudente que al aplicarse en la práctica, establezca en la realidad y no en la letra muerta de disposiciones inaplicables, un régimen de protección para los empleados de comercio que contribuya a incorporar al nuevo régimen legislativo nuevas normas de justicia social.

Nada más.

Sr. Aráoz (J. I.). — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Cafferata). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital. Después la concederé al señor diputado por Tucumán.

Sr. Dickmann (E.). — Señor presidente: Formo parte de la Comisión de Legislación General y con mis distinguidos colegas hemos elaborado, en un largo y minucioso estudio, el proyecto de ley que está a consideración de la Honorable Cámara. Puedo asegurar a los señores diputados que la comisión en ningún momento ha improvisado; que ha considerado todos los aspectos del despacho y que ha predominado en su sanción un amplio espíritu de transacción. Así se ha podido llegar a que se firme el despacho por unanimidad.

Ese despacho, que antes de ser sometido a la Honorable Cámara ya ha tenido una amplia discusión pública en la prensa diaria, es producto de un espíritu de transacción. Y nosotros, los socialistas, mi colega el señor diputado Ruggieri y yo, lo hemos demostrado cabalmente en el seno de la comisión. Todos los proyectos y todos los antecedentes que ha tenido la comisión a su consideración, establecían un mes de indemnización por cada año de trabajo, y hemos llegado a transar sobre medio mes de indemnización; y hemos aceptado, casi diría sugerido, que en vez de tener un efecto retroactivo a toda la antigüedad de los empleados hasta 30 años, se lo limitara a 10 años.

No es, pues, un espíritu de intransigencia el que ha presidido el despacho de esta comisión. Deseo recalcar este hecho, para que los señores diputados no vean en nuestra posición actual un espíritu de intransigencia.

Considero que el momento actual de crisis del comercio — que la reconozco — es propicio para la sanción de esta ley, porque el número de empleados que ahora tiene a su servicio el comercio del país, es el mínimo a que puede reducirse su personal. El comercio en los últimos dos años se ha librado por despido, por eliminación,

por liquidación, de todos los empleados que podrían sobrarle. Es ahora que el comercio ha tocado fondo y tiene el mínimo de empleados que van a entrar en los beneficios de esta ley.

Ahora bien; deseo que los señores diputados perciban esta situación: o se es partidario de esta ley con todas sus consecuencias, porque se considera que la población puede soportarla, que conviene que la soporte, o no se es partidario de esta ley. Invocar la crisis del comercio para esa cláusula, para ese regateo mezquino de 10 a 5 años, me parece una sinrazón y algo carente de lógica. Comprendo a aquellos que creen que es una ley inoportuna ahora — no comparto esa opinión, pero la encuentro lógica —, pero es un error considerar que la crisis del comercio puede ser abondada por esta cláusula.

Se trata, señores diputados, de lo siguiente: a un empleado con 20 ó 30 años de servicios, despedido, ¿cuánto tiene que indemnizarle la casa comercial que lo despide? Para nosotros, el mínimo son 10 años con medio mes de sueldo. Algunos señores diputados creen que el comercio se va a arruinar por eso y proponen cinco años, o sea dos meses y medio de sueldo.

Debo advertir a los señores diputados, y seguramente lo han de percibir tanto o mejor que yo, que los comerciantes no están obligados a despedir a nadie. Si no quieren pagar los diez años a un empleado que tiene quince o veinte de antigüedad, que no lo despidan. Estoy seguro que si sancionamos los cinco años invitamos al comercio a despedir muchísimos empleados; van a librarse de empleados de veinticinco o treinta años con pagarles dos meses y medio de sueldo. En cambio, sancionando los diez años, es decir, cinco meses de sueldo, va a ser más difícil el despido.

El propósito de esta ley y el propósito de los empleados que la reclaman no es ser despedidos. Hace pocos días, cuando la Honorable Cámara trataba este asunto con una barra muy nutrida de empleados y de empleadas, a la salida conversé con un grupo de

ellos e interrogué a una empleada diciéndole: —¿Usted quiere la ley para recibir los diez medios meses de indemnización? Me contestó: — No, señor diputado, lo que quiero es que no me despidan; no vamos en pos de esa indemnización: lo que queremos es la estabilidad del empleado.

Debo hacerle notar al señor diputado por Mendoza, que cree que este es una transformación muy brusca en nuestro régimen del Código de Comercio, que no hay tal, porque la ley en realidad en muchas de sus cláusulas viene a sancionar costumbres del progresista comercio argentino.

Sr. Vicchi. — ¿Me permite el señor diputado una interrupción?

Sr. Dickmann (E.). — Sí, señor diputado.

Sr. Vicchi. — Deseo hacerle notar al señor diputado que no es posible legislar teniendo en cuenta algunas de las costumbres de la Capital Federal, sumamente limitadas. Hay que tener en cuenta que la evolución del comercio de la Capital Federal no es desgraciadamente la evolución del de todo el país...

Sr. Dickmann (E.). — Sí, señor diputado.

Sr. Vicchi. — ... y que esas costumbres a que el señor diputado alude, algunas de las cuales existen en el gran comercio de la Capital Federal, no existen en general en el pequeño comercio. Desgraciadamente esa es la situación real por lo que debemos modificar en forma tal que no haya perturbaciones para el comercio.

Sr. Dickmann (E.). — Sí, señor diputado. Sin embargo, le advierto que en las costumbres del comercio argentino existen muchas de estas prescripciones. En el antiguo comercio que tenía un carácter patriarcal, donde el empleado era casi miembro de la familia, en que muchas veces llegaba a casarse con la hija del patrón (*risas*), las relaciones eran más sencillas y más fáciles. Era casi socio de la casa. Y en el moderno comercio de esta Capital y del interior hay costumbres muy importantes que la ley viene a aplicar a los

malos comerciantes, obligándolos a ponerse a tono con los buenos comerciantes. Ejemplo de ello son las vacaciones pagas. En muchísimos comercios, por razones de conveniencia comercial, se otorgan vacaciones pagas a los empleados por turno, para que el empleado sea después más apto, trabaje con más cariño y produzca más al patrón.

Respecto de las indemnizaciones, muchísimas casas de comercio no arrojan a la calle a un empleado de veinte o veinticinco años sin indemnizarlo, y al hacerlo no se atienen al mezquino mes de sueldo que otorga el Código de Comercio. He recibido una cantidad de datos al respecto y si bien no deseo recargar el debate con ellos, voy a mencionar algunos para que se vea que actualmente muchos comercios dan más que los dos meses y medio, que ahora regatean en defensa del comercio, o del mal comercio.

Aquí tengo un caso que me han traído hoy, muy instructivo, referente al empleado Clemente Fernández, español, domiciliado en Moreno 3647, casado, de 66 años de edad, que tiene a su cargo esposa y seis hijos. Ha estado empleado en la sociedad El Eje desde el año 1903, fecha en que se constituyó la sociedad anónima, habiendo sido antes empleado de la casa Machuca y Martínez, a la que sucedió la sociedad El Eje. Ingresó en la casa Machuca y Martínez el año 1896. Fué despedido el 30 de Abril de 1932 y recibió como remuneración tres meses de sueldo, siendo su sueldo mensual 330 pesos, es decir, seis medios sueldos de esta ley.

Como éste tengo una gran cantidad de casos, de viejos empleados despedidos, a quienes se remunera con tres o con cinco meses de sueldo. Entonces esta ley no es una revolución total y completa.

Sr. Vicchi. — ¿Me permite, señor diputado?

Sr. Dickmann (E.). — Sí, señor diputado.

Sr. Vicchi. — Deseo aclarar, ante las manifestaciones del señor diputado, que en mi posición de legislador adopto una

actitud absolutamente equidistante de los intereses en pugna.

En cuanto a los efectos, pregunto al señor diputado: si esta ley produce perturbaciones económicas, ¿serán solamente los empleadores los que se perjudiquen, o agravaremos la situación de los empleados, restringiendo el número de los que actúan en las actividades comerciales y produciendo así un aumento en el paro forzoso? ¿No influiría la ley también en las remuneraciones? Todo eso es un conjunto de problemas que hay que tener en cuenta.

Yo no contemplo solamente esta disposición sino todas las disposiciones de la ley que aisladamente suponen una carga nueva — en algunos casos cargas útiles que hemos votado con mucho gusto — y que deseamos que no se acumulen en forma tal que la ley resulte muy gravosa.

Sr. Dickmann (E.). — Estoy acostumbrado a oír en la Honorable Cámara que cuando se quiere limitar algún beneficio a un grueso grupo de empleados o de obreros, se haga oposición a ese beneficio — supongo que con la mejor buena fe — en nombre de los obreros y de los empleados, diciendo que serán ellos los perjudicados por ese beneficio. Y si es perdonable en el señor diputado por Mendoza ese modo de sentir y de pensar, es imperdonable en el señor diputado Bunge, que ayer oponiéndose a los diez meses y proponiendo cinco, dijo que era en defensa de los empleados, y para ello invocó una serie de razones referentes a materia de jubilaciones.

Señores diputados: no tengo por qué reivindicar para la seriedad de mi grupo y para mi propia obra legislativa, no haber jamás fomentado reivindicaciones obreras, o beneficios imposibles. Hemos comprendido que es un pecado mortal prometer cosas que no se pueden cumplir, y en materia de jubilaciones hemos tenido la actitud prudente, sensata, moderada que todos los señores diputados conocen. Pero no son puntos de comparación. ¿Puede haber algún punto de contacto entre esa indemnización por despido, y un sistema

completo de jubilaciones, tal como existe entre nosotros y que no es debido — díganme bien los señores diputados — a la demagogia radical? ¡Ahora vamos a convertir al radicalismo en el chivo emisario de todas las culpas y de todos los pecados del pasado! Fué la pésima ley, la antisocial y antieconómica ley de jubilaciones civiles, la que ha servido de modelo a las otras leyes de jubilaciones; y esa pésima ley tiene una edad inmemorial en las costumbres políticas argentinas que aún no han podido ser modificadas. Ha sido la pésima ley de jubilaciones civiles, que jubilaba con el cien por ciento, con el promedio de los sueldos del último año y sin límite de edad. Teníamos así funcionarios públicos jubilados a los 43 años con 3.000 pesos de sueldo. Eso es lo que ha dado ese escandaloso régimen jubilatorio. Todas las leyes de jubilaciones sancionadas posteriormente son mejores que la ley de jubilaciones civiles. El día que se modifique fundamentalmente esta ley, habrá el derecho de hablar en contra de las otras leyes de jubilaciones. Si ella no se modifica, el que habla en contra de las otras comete a sabiendas una mala acción.

Son cosas totalmente distintas. Aquí se trata de un beneficio justo, equitativo e indispensable. Un empleado que durante 20 ó 30 años ha colaborado en una casa comercial, en su prosperidad, en su engrandecimiento, en su método y en su orden, lo menos que puede percibir al ser despedido son cinco meses de sueldo, sobre todo cuando se limita al sueldo a 500 pesos. Son 2.500 pesos, para un hombre muchas veces padre de familia que, arrojado de su empleo, casi nunca encuentra otra ubicación. Por otra parte, vuelvo a repetirlo, ello no es obligatorio: con no despedir a los empleados, los comerciantes se libran de esa indemnización.

Es evidente que no hay que confundir ese beneficio con otros que acuerda la ley. La indemnización por falta de preaviso... ¿Pero cree algún señor diputado que se va a indemnizar por

falta de preaviso? Los patrones tendrán especial cuidado en dar el preaviso y serán escasísimos los casos en que el patrón se olvide de darlo. Eso no puede entrar en los cálculos de la indemnización. Es simplemente una precaución a fin de que un empleado no sea arrojado a la calle de la noche a la mañana y que el patrón esté obligado a darle el preaviso.

Si hacemos una cuestión sería respecto de esa cláusula, es porque consideramos que en esta materia ya se han cercenado mucho los beneficios. No voy a entrar en el aspecto jurídico y legal de si eso es reconocimiento de antigüedad o si eso es retroactividad. Dejo esa parte a la consideración de los distinguidos juriconsultos, que abundan en esta Honorable Cámara. Me parece una discusión bizantina. El Congreso puede legislar sobre esta materia y lo ha hecho ya en otras leyes. Así que si ello tuviera muchas importancia jurídica, tiene poca importancia legislativa.

Es necesario que los señores diputados comprendan que esta ley no es un castigo al comercio. Este se va a adaptar a la nueva ley y va a agradecer al Parlamento argentino haberla dictado. El comercio que está en manos de una clase social inteligente, capaz, de gran empuje y de fecundas iniciativas, comprenderá que estas indemnizaciones entran en el costo de explotación.

¿Cuánto gasta una casa de comercio en publicidad? ¿Saben los señores diputados lo que gastan algunas grandes casas de comercio en publicidad por año? Es asombroso; son sumas fabulosas. ¿Saben los señores diputados lo que las grandes casas de comercio gastan en luz en sus vidrieras, escaparates y letreros luminosos? Es asombroso lo que gastan. ¿Saben los señores diputados lo que las grandes casas gastan en aspectos aparentes de su comercio para acreditar determinado artículo? Son sumas fabulosas. ¿Y cómo, pues, no van a entrar estos gastos que son mensurables, calculables, en el costo de su explotación? Si las máquinas se amortizan, si los comercios se aseguran

contra todo riesgo, si hasta las vidrieras se aseguran, y todo eso entra en los gastos de explotación, ¿por qué no hacemos lo mismo con lo único que no ha entrado hasta ahora: la seguridad del personal de la industria humana, que tan bien ha calificado ayer el señor diputado Ruggieri? Es necesario disipar la falsa atmósfera patronal que se ha creado alrededor de este proyecto, y que yo comprendo impresiona a algunos señores diputados. Es por rutina, es por no querer innovar nada en materia de trato entre empleadores y empleados.

Yo estoy profundamente convencido de que una vez sancionada por el Congreso la ley y entrada ella en vigencia, el comercio comprenderá que es una conveniencia mutua, que es una ventaja recíproca entre empleadores y empleados dar a éstos buenas condiciones. Y no regateemos, señores diputados, los cinco medio meses, que es a lo que queda reducido el debate.

Si aceptamos toda la ley, con todas sus prescripciones y consecuencias, aceptemos los diez años, que representan diez medios meses, que es una transacción sobre los primitivos proyectos.

Yo comprendo que eso pueda ser una pequeña carga sobre el comercio, en lo que respecta a los antiguos empleados, pero éstos no son muchos. Para los nuevos empleados empieza la aplicación del régimen de la ley cuando lleguen ellos a treinta años de antigüedad; entonces tendrían que ser indemnizados con quince meses de sueldo, si no hay una nueva ley mucho más amplia.

Se refiere eso, pues, a un grupo reducido de empleados que pueden ser despedidos ahora. No le regateemos los dos meses y medio de sueldo.

Pido a los señores diputados que consideren que no hay ninguna comparación ni ninguna semejanza entre esa indemnización y el conjunto de las reglas y leyes sobre jubilaciones que se refieren al grueso de la población, a distraerlo o substraerlo de la actividad industrial y comercial a una edad temprana, a jubilarlo con exce-

sivos sueldos o salarios. No tiene nada de comparable, es un estricto espíritu de justicia el que anima a esta cláusula. Votemos los diez años, que esta ley, por espíritu de transacción, ha fijado, y no aceptemos los cinco años, que es un regateo, vuelvo a decirlo, y no quiero con ello molestar a ningún señor diputado, es un regateo simplemente mezquino.

Nada más.

Sr. Araoz (J. L.). — Pido la palabra.

Quiero decir unas pocas palabras, porque ayer impugné de inconstitucional la disposición que estudiamos que viola principios económicos y legales de orden fundamental, y ello ha sido negado por los señores miembros de la comisión.

Antes debo decir que para el vulgo resulta muy fácil, cómodo y muy provechoso mostrarse generoso con el dinero ajeno repartiéndolo, y muy egoísta oponerse a mejoras sociales cuando a uno no van a costarle ni un medio. Pero ni los señores diputados de la izquierda ni nosotros, nos guiamos por conceptos tan menguados. Todos sabemos perfectamente cuánta es la complejidad de estos asuntos. Tengo la seguridad de que para ellos es duro verse en el caso de imponer gravámenes al comercio, como para mí, y para todos los opositores a estos excesos, nos es duro oponernos aunque sea parcialmente al otorgamiento de beneficios que hayan de recaer sobre gente necesitada.

Es natural que los señores diputados de la izquierda tengan más en cuenta las facultades del Estado y el aspecto distributivo de la riqueza pública, y que en el sector de la derecha nos preocupemos en la debida medida del derecho de propiedad y del derecho de libre contratación, que son las bases fundamentales de nuestros principios económicos.

He demostrado en la comisión a que pertenezco y he de demostrar después, que tengo la mejor voluntad para estas leyes sociales. Yo habría deseado que esta ley saliera en condiciones de

ser aprobada por el Honorable Senado en poco tiempo y pudiera ser promulgada y no vetada por el Poder Ejecutivo; pero estoy convencido de que esta ley va a salir con fallas que dan lugar a reparos constitucionales, por los que posiblemente se estancará y así los que pretendemos beneficiar van a quedar en peores o iguales condiciones que antes.

En el aspecto constitucional quiero hacer notar que de los dos proyectos socialistas, que tienen la responsabilidad de esos sectores y la responsabilidad individual de los señores diputados, ninguno vulnera el derecho de contratación en materia comercial ni el principio de la no retroactividad de la ley. Los dos quedan perfectamente a salvo. Y ellos serían, en el fondo, aceptables para nosotros. Pero con la mejor voluntad y con la mejor intención, en mi concepto, la comisión se ha excedido, y la disposición que estudiamos afecta principios fundamentales. Si la sancionamos sin reparos, quedamos desarmados completamente ante el ataque y la táctica del Partido Socialista: como es natural ellos sostienen, con toda buena intención y con perfecto sistema, la omnipotencia del Estado; en cambio, nosotros entendemos que por nuestra doctrina económica y social debemos defender — por supuesto que no en extremo — el derecho de propiedad y el de contratación en su esencia, aceptando todas las mejoras necesarias para hacer justicia y propender al bienestar general a que aspira nuestra Constitución.

Yo deseo dar algunos antecedentes para demostrar que la retroactividad, cuando hiere derechos adquiridos y la voluntad expresada en los contratos, es inconstitucional, aun cuando no aparezca concretamente expresada en las disposiciones de la misma Constitución.

El doctor Calvo, en sus comentarios al derecho norteamericano, habla con mucha razón del carácter natural, universal y milenarismo del principio de libre contratación. La Constitución alemana que, como saben los señores di-

putados, tiene tintes socialistas, dice en su artículo 152 esto que es evidente: «Las relaciones económicas están regidas por el principio de la libre contratación». En Estados Unidos hay dos disposiciones al respecto: la sección novena, que dice que ninguna ley será retroactiva, y la sección décima, que dice que ningún Estado podrá hacer leyes retroactivas ni leyes que tiendan a anular los contratos. Nuestro Código Civil, con plena conciencia, ha establecido en su artículo 3º la no retroactividad de las leyes. Cita a Savigny, quien ha hecho un estudio profundo, que todos nosotros hemos leído, y que en la parte pertinente, que el legislador transcribe, dice así: «El principio de la retroactividad de las leyes dejaría insubsistente y al arbitrio del legislador todas las relaciones de derecho sobre que reposa la sociedad.»

Bastaría citar este antecedente, aunque nuestra Constitución no dijera absolutamente nada, para darnos cuenta de que el principio de la no retroactividad, cuando hiere derechos adquiridos, está perfectamente comprendido en aquel artículo de la Constitución que dice: las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que se refieren a derechos esenciales.

En realidad, nuestra Constitución en diferentes artículos estatuye la no retroactividad cuando se hiere derechos adquiridos y cuando se afectan los contratos. Si bien la Constitución de Estados Unidos lo dice textualmente, la nuestra trae varias disposiciones que expresan lo mismo. El artículo 14 estatuye el derecho de trabajar y ejercer toda industria lícita y de usar y disponer de la propiedad. No resiste a la lógica más primitiva que haya libertad de comerciar y de usar y disponer de la propiedad, sin libertad para hacer contratos y si éstos no han de ser respetados. Y si aceptamos que los contratos pueden ser vulnerados con mayor o menor violencia, debemos

convenir en que la libertad de industria y de comercio no existe.

El artículo 15 establece un ejemplo perfecto de irretroactividad cuando hay derechos adquiridos. Por supuesto que los Constituyentes tenían derecho a hacer mucho más que nosotros. Desde luego la situación de los empleados por mala que sea, no es comparable a la de los esclavos. Y bien, el artículo 15 de la Constitución declaró la libertad de los esclavos, pero previa indemnización. Los Constituyentes no se creyeron facultados para dejar insubsistente un derecho preestablecido.

La Constitución dice también que la propiedad es inviolable, salvo sentencia fundada en ley; que ningún servicio personal es exigible sino en virtud de sentencia fundada en ley, que queda prohibida la confiscación de bienes.

El artículo 19 trae otra prescripción que también evidencia lo que estoy diciendo. Ningún habitante de la Nación, dice, será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Este artículo es absolutamente incompatible con el principio de retroactividad, porque si los comerciantes en este caso y de acuerdo con este artículo, han podido contratar libremente con sus empleados, no es posible que con posterioridad, por una disposición puramente legal, sean gravados por el uso de esa autorización conferida por la Constitución.

La retroactividad de la ley no puede llegar a los casos en que se hieren derechos adquiridos y cuando se trata de contratos establecidos. Es conveniente hacer una distinción. Las leyes pueden ser retroactivas. En todas partes existe la retroactividad, pero no cuando afecta derechos adquiridos o contratos existentes perfectamente claros.

He dicho que el párrafo que estudiamos hiere esos derechos. Pongo por ejemplo este caso: un comerciante tiene un contrato a término: ha vencido el contrato hace un mes o un año. Ese contrato está perfectamente liquidado, se ha pagado el salario correspondiente y nosotros, de golpe, por un con-

trato terminado y liquidado, le creamos a ese comerciante nuevas obligaciones. Eso es perfectamente retroactivo y violatorio de la voluntad de las partes contratantes y de derechos completamente adquiridos en el sentido de la liberación.

Parecería creerse que cuando la Constitución habla de la propiedad se refiere únicamente a los inmuebles. No es así, señor presidente; es a todo derecho de propiedad, aun de carácter subjetivo.

Deseara hacer estas consideraciones y traer estos antecedentes para fundar mi voto, porque, como ya he dicho, creo que la ley que discutimos es excesiva, especialmente para el actual estado económico. Pero para mí, esta es una cuestión que pasa a segundo término, porque en realidad cien millones más o menos no nos van a traer una ruina definitiva; lo más grave que tiene esta ley es que este artículo, como algunos posteriores, según se va a ver, quebrantan completamente el derecho común y constitucional y nos deja desarmados a los miembros de la derecha para defender nuestros principios sociales y económicos, tan afectados por este proyecto de ley.

Nada más.

Sr. Courel. — Pido la palabra.

La Comisión de Legislación, señor presidente, no puede pasar por alto las palabras pronunciadas por el señor diputado por Tucumán, doctor Aráoz, que se refieren, casi diría en una forma insistente, teniendo en cuenta lo que manifestara en la sesión de ayer a la retroactividad de la ley bajo la fase constitucional, argumento que fuera ya contestado con toda elocuencia por el señor diputado Vicchi. Ahora el señor diputado por Tucumán insiste en el argumento citando a Calvo sobre el principio de no retroactividad de las leyes cuando hieren derechos adquiridos. En homenaje al comentarista y a la expresión pronunciada por el señor diputado por Tucumán, debo contestar, en nombre de la comisión, que estamos de perfecto acuerdo con el señor diputado por Tu-

cumán, sosteniendo que una ley no puede ser retroactiva cuando hiere derechos adquiridos.

Sr. Aráoz (J. I.). — Cuando hiere contratos.

Sr. Courel. — Pero precisamente esta ley no hiere derechos adquiridos.

Sr. Aráoz (J. I.). — Pero sí contratos.

Sr. Courel. — En cuanto a los contratos, señor diputado, si usted lee el artículo 158 de este despacho, los contratos a plazo determinado se considerarán como de plazo vencido, aceptando la tácita reconducción; de modo tal que dentro de la teoría que enuncia el señor diputado vienen a ser considerados como contratos a plazo indeterminado.

Decía, señor presidente, que la teoría enunciada por el señor diputado por Tucumán no contradice el despacho de la comisión, porque este despacho no afecta ningún derecho adquirido al limitar la retroactividad — mal llamada así a mi juicio y a juicio de la comisión — en el término de los beneficios que pudieran gozar los empleados de comercio comprendidos dentro de esta ley.

Ha dicho también el señor diputado que es muy fácil ser generoso con dinero ajeno.

Sr. Aráoz (J. I.). — Para el vulgo, señor diputado. He dicho que para el vulgo resulta muy fácil y cómodo y muy provechoso mostrarse generoso con el dinero ajeno.

Sr. Courel. — Discúlpeme el señor diputado le había oído mal. Pero lo tomé en el sentido como si esta ley quisiera venir a favorecer situaciones de injusticia sacando esos beneficios de una cierta clase privilegiada. Desde luego, es bien inexacto ese concepto y voy a desmenuzarlo.

Sr. Aráoz (J. I.). — Permítame el señor diputado. Al contrario, he dicho que no nos guiamos por conceptos tan menguados, que todos sabemos cuánta es la complejidad de este asunto, que para los señores diputados es duro verse en el caso de imponer gravámenes al comercio, como para mí y para todos los opositores a estos excesos nos

es muy penoso oponernos, aunque sea en parte al otorgamiento de beneficios que recaigan en gente necesitada.

Sr. Courel. — Me alegro que el señor diputado haya aclarado su pensamiento puesto que yo tenía anotado que el señor diputado había manifestado también que luego algunos sectores de esta Cámara se resistirían a votar gravámenes para hacer frente a situaciones generales de la administración, que tendrían como consecuencia los efectos de la ley.

A los efectos de la argumentación que he de hacer para no insistir demasiado sobre este inciso, me he de referir en concreto al argumento del factor económico que con tanta violencia se cree que ha de pesar sobre las decisiones de los señores diputados para votar el inciso tal como lo aconseja el despacho.

Desde luego, en la sesión de ayer ya se observó por el señor diputado Vicchi respecto a esto, que yo calificara como de derecho adquirido la antigüedad en el desempeño del servicio. Podrá haber sido mal empleado el término «derecho adquirido»; en realidad no sé cómo podríamos llamar a una aptitud física e intelectual ejercida por una persona durante muchísimos años que ha tenido naturalmente por la acción del tiempo, que sufrir un desgaste. Creo de no ser la fiel expresión «derecho adquirido», que se trata más bien de un interés respetable que la ley y el legislador están en la obligación de cuidar y hacerlo valer como medio de hacer por lo menos más fácil y llevadera la situación de esa persona que ha entregado por largos años de servicios todas sus energías al desempeño de una función.

Naturalmente que el despacho de la comisión limita esa función, ese interés respetable o esa aptitud gastada. Y se dice, por los impugnadores del inciso, «que la retroactividad que se establece, limitada a diez años en los servicios anteriores a la fecha de la ley, es el más grave de los perjuicios para el empleador, porque lo obliga a reconocer de inmediato sumas de consideración que no pudo prever y para las cuales

no establece reservas de ningún género».

Pero he de analizar cómo estas reservas se transforman, en los números, en cantidades tan insignificante que sólo enunciarlas, a mi juicio, será suficiente para que sea votado el despacho tal como lo propone la comisión.

Me voy a referir a un caso concreto, a un caso de una casa comercial conocida que tiene numeroso personal al que ha otorgado muchas franquicias, adelantándose a la ley, porque esta ley, en resumidas cuentas no hace más que legalizar la situación de hecho que muchas casas comerciales tienen establecida con respecto a sus empleados.

Me voy a referir a la casa Saint Hermanos, que ha tenido la deferencia de enviar a la comisión datos concretos sobre lo que representaría el cumplimiento de las obligaciones de esta ley en la forma que tenía antes de que fuera modificado el despacho de la propia comisión a requerimiento de los sectores Demócrata Nacional, Socialista Independiente y Antipersonalista.

La Casa Saint Hermanos, calcula que esta indemnización, tomando el término de diez años, ha de comprender el 5 por ciento de su personal, y que desde luego cree que ha de ser la común en todas las casas comerciales. Este argumento no es para las casas de la Capital solamente, sino para toda la República. Ese 5 por ciento importaría la cantidad de 73.883,02 pesos, sobre una planilla de sueldos de 3.546.385,90 pesos al año, lo que representa mensualmente la cantidad de 295.532,15 pesos. Esta cantidad de 73.883,02 de pesos es, señores diputados, el 2,08 por ciento al año. Imagínense los señores diputados lo que representa mensualmente, es decir, 0,17 por ciento.

Sr. Vicchi. — Si me permite el señor diputado...

Yo no he hecho cálculos numéricos porque considero que todos esos cálculos reposan en una base totalmente arbitraria.

Sr. Courel. — No, señor diputado.

Sr. Vicchi. — Tienen una base totalmente arbitraria.

Sr. Courel. — Si me ha escuchado el señor diputado, sabe que he citado un caso concreto, el de la casa Saint Hermanos, con numeroso personal.

Sr. Vicchi. — ¿Cómo va a poder calcular los casos de liquidación de negocios que se produzcan, en los cuales habrá indemnización?

Sr. Dickmann (A.). — El señor diputado por la Capital doctor Sierra trajo precisamente el cálculo de la casa Saint.

Sr. Vicchi. — Yo no he hecho el argumento, de manera que la réplica no me alcanza.

Sr. Presidente (Cafferata). — Sírvanse los señores diputados no dialogar, y ruego al señor diputado por Córdoba se dirija a la Presidencia.

Sr. Courel. — No es mi propósito hacer réplica de ningún género. Había manifestado que se ha atacado a esta tan mal llamada retroactividad diciendo que obligaba inmediatamente a reconocer sumas de consideración que no pueden preverse y para las cuales no se establece reserva de ningún género.

Desde luego ese es el argumento central que puede hacerse a esta cuestión y justamente ese argumento y con esas palabras precisas ha sido hecho por varias asociaciones que han llegado a la Cámara, como la comisión patronal para el estudio de las leyes del trabajo, Asociación del Trabajo, Bolsa de Comercio, Centro de Almaceneros, Confederación Argentina del Comercio, de la Industria y de la Producción, Liga de Defensa Comercial, Unión Industrial Argentina. Ya ve el señor diputado que las he englobado a todas y que tomo precisamente una de las casas comerciales más importantes de la Capital, y que seguramente pertenece a alguna de las asociaciones nombradas, la del señor Saint, para demostrar con números y datos de esa casa, que esta ley no ocasiona ningún gravamen que se pueda llamar respetable, ni siquiera gravamen. Representa, como he dicho, el 0,17 por ciento mensual, o sea el 2,08 anual. Este es el gravamen, esta es la reserva enorme que tendrían que hacer los comercios para cumplir con

la mal llamada retroactividad de diez años.

Con estas pocas palabras creo haber contestado en general el argumento de orden económico que puede haber pesado en algunos señores diputados y solicito del señor presidente, si es que no se hace uso de la palabra, que ponga a votación este inciso ya tan discutido.

Sr. Bunge. — Pido la palabra.

No era mi intención volver a hacer uso de la palabra al discutirse este apartado. Me obliga a hacerlo una de esas referencias de orden personal que son predilectas del señor diputado Enrique Dickmann, cuando no tiene otros argumentos a su disposición. Por supuesto que no me preocupa ni me alarma el perdón que me niega el señor diputado. Me deja muy tranquilo, y en este caso, ampliamente satisfecho, dada la seriedad de las razones en que me fundo, y la inconsistencia que encuentro en las razones que él ha aducido, a pesar de ser coautor del proyecto y haber tenido desde ayer tiempo para preparar tranquilamente su exposición, que me parece, a pesar de ese tiempo, descosida y carente de consistencia.

Me ha reprochado también el señor diputado que comparara esta ley con las leyes de jubilaciones de los ferroviarios, tranviarios y demás votadas por el Congreso anterior, y que omitiera la comparación de esas leyes con la nacional de jubilaciones y pensiones civiles. Ese es un argumento capcioso, porque está bien claro en la versión taquigráfica del debate de ayer que al referirme yo a esas leyes lo hice contestando al otro coautor del proyecto diputado Adolfo Dickmann, quien dijo lo siguiente, que consta en la página 815 del tomo V del Diario de Sesiones:

«Creo, señor presidente, haber desmontado esta disidencia, formulada ante un Congreso que ha votado leyes de jubilaciones que al día siguiente reconocían el derecho de antigüedad máxima exigida. ¿Acaso no hemos votado las leyes de jubilación de ferroviarios, de bancarios, de tranviarios? ¿Esas leyes han establecido alguna limitación a la antigüedad anterior? Al día si-

guiente de estar sancionadas, un bancario o un ferroviario podía probar los treinta años de servicios exigidos y pedir la respectiva jubilación.»

A esto yo contesté que era un mal precedente el invocado, porque eran leyes que había combatido él conmigo. No podía referirme sino a esas leyes...

Sr. Dickmann (A.). — Pero el señor diputado ha atribuído todos los males a los radicales...

Sr. Bunge. — Esas leyes son de ellos.

Sr. Dickmann (A.). — Es a eso a que se ha referido el señor diputado.

Sr. Bunge. — A eso voy a referirme ahora.

No estaba en cuestión la ley nacional de jubilaciones y pensiones, que yo creo, como el señor diputado, y lo he dicho muchas veces, que es la causa fundamental de ese delirio jubilatorio, por la monstruosidad de sus prebendas. Pero el señor diputado que me reprocha no haber mencionado esa causa fundamental, sabe, o tiene el deber de saberlo perfectamente, que tal vez el diputado que más la ha denunciado y combatido es el que habla, y tiene el deber de saber que ha presentado, como miembro de la comisión especial, un anteproyecto — que espera sea sancionado con el apoyo de su grupo — que eleva el límite de edad a los 55 años y que exige un mínimo de 35 años, y aumenta en cambio las prestaciones más necesarias de una caja de jubilaciones, para que sea realmente digna de la calificación de órgano de seguro social.

No tenía por qué mencionarlo, señor presidente, porque no era mi objeto hacer un análisis de nuestro sistema, o más bien dicho, de nuestro desquicio jubilatorio, sino simplemente contestar a una mala comparación, contraproducente, en mi entender, hasta por ciertas analogías que tiene con esos privilegios de grupo el despacho que votamos ahora.

Esas analogías son las que destaqué. Los empleados y obreros aparentemente beneficiarios de aquellas leyes se

dieron cuenta, más tarde, que recaían en perjuicio de ellos mismos, por lo exageradas, esas disposiciones que les parecían favorables. Y yo he dicho que mucho me temo que las disposiciones de esta ley — que votadas en tiempos normales no pueden provocar ninguna perturbación y que voto ahora por sus beneficios de carácter permanente — si se dictan en tiempo de crisis, como el actual, pueden recaer en el primer momento sobre los propios beneficiarios. Esa ha sido mi argumentación, a la que no ha contestado el señor diputado por la Capital doctor Enrique Dickmann.

Ha dicho el señor diputado que estamos haciendo un regateo mezquino. Eso es tener un concepto superficial de la cuestión. No se trata de regatear, si se hace la indemnización por cien o doscientos pesos, más o menos. Nuestro concepto es tratar de salvar el sistema, el principio, impidiendo que, por no ceder en lo menos, se pierda, en los hechos, lo más.

Para demostrarlo, voy a hacer una breve recapitulación del valor posible — sólo el posible porque estamos en el terreno de las conjeturas — de los beneficios que acuerda esta ley, que equivalen a suplementos de sueldo.

La reforma del artículo 155 acuerda derecho al sueldo íntegro por enfermedad, hasta durante tres meses, a los empleados con diez años de antigüedad y hasta seis meses a los que tengan más de diez. El primer derecho, de acuerdo con la experiencia de morbilidad de la más grande mutualidad inglesa — de las nuestras no tenemos experiencia suficiente — significaría un suplemento de sueldo del dos y fracción por ciento, que a primera vista no es muy elevado, pero que podría ser, según la morbilidad de los diferentes grupos comerciales, del dos y medio por ciento. El segundo es una ampliación del primer derecho, en un 20 al 30 por ciento, solamente. No duplica el costo porque las enfermedades de larga duración son las menos. Se trata, pues, de un suplemento de salarios y sueldos que, conjetural-

mente, debe estimarse alrededor del dos y medio al tres por ciento.

El derecho de vacaciones, con la graduación que tiene por antigüedad, no es tampoco calculable. Es verdad que hay muy grandes empresas en que el derecho de vacaciones no puede hacer indispensable una ampliación del personal suplente, pero eso depende, señor presidente, de la forma en que se utiliza el trabajo del personal. Si el personal estuviera bien organizado y se utilizara su capacidad de trabajo hasta el cien por ciento, es evidente que se necesitaría un aumento de personal para poder garantizar las vacaciones a todos. Teóricamente, si en todas las empresas se utilizara la capacidad del personal el cien por ciento, el suplemento sería del ocho por ciento; pero creo que en la mayoría de los casos no será así. Quiero suponer, entonces, conjuntamente, que en el grueso del grupo de empleados y obreros del comercio, ello significa un costo cuatro veces menor que el teórico y abstracto, es decir, un suplemento del dos por ciento.

Los gastos de despido, según las cifras que ha dado la casa Saint, significan un suplemento del dos por ciento mensual o dos por ciento anual — que es el mismo caso — y en esto ha incurrido en una confusión el señor diputado Courel. Las cifras que él ha dado demuestran que la indemnización del despido, con la proporción de secesiones que supone esa casa, de cinco por ciento, implican un costo del dos por ciento sobre los sueldos mensuales o del dos por ciento de los sueldos anuales.

Sr. Courel. — No, señor diputado; anuales...

Sr. Bunge. — Señor diputado: es lo mismo. Setenta y tres mil pesos son el dos por ciento de tres millones y pico, que es la masa anual, o mensualmente 6.000 pesos sobre una masa de trescientos mil.

Sr. Courel. — El cinco por ciento de ese dos por ciento.

Sr. Bunge. — No, señor diputado.

Sr. Dickmann (A.). — Parece que la

casa no ha tenido en cuenta la limitación de los sueldos a 500 pesos.

Sr. Bunge. — Iba a decir esto, señor diputado: que me parece incalculable ese gasto, porque la frecuencia de las secesiones debe ser enormemente variable según las empresas. Es posible que la casa Saint, que es una gran empresa industrial, tenga un personal de administración más estable y tenga, en cambio, un personal obrero más inestable que el promedio de las empresas comerciales, como lo es el personal de todas las industrias. Por eso no doy sino valor de indicio, y muy leve, a los datos de la casa Saint.

Sr. Courel. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado?

Sr. Bunge. — Sí, señor.

Sr. Courel. — La casa Saint ha tomado 5 por ciento del personal como no comprendido dentro de esta cláusula de los 10 años.

Sr. Bunge. — Exactamente.

Sr. Courel. — Acaba de decir el señor diputado que ese 2,08 por ciento, 73.000 pesos, se calcula sobre un promedio de 3.546.385 por año. De manera que ese 5 por ciento mensualmente debe dividirse por el cálculo del 2,08 por ciento. Tiene que considerarse el 5 por ciento.

Sr. Bunge. — Yo entiendo esto: que la casa Saint estima que su experiencia es de 5 por ciento de bajas del personal cada año.

Sr. Courel. — Exactamente.

Sr. Bunge. — Y en ese caso el costo es 2 por ciento.

Sr. Courel. — No, señor diputado: es 0,17 por ciento.

Sr. Bunge. — No nos entendemos.

Sr. Courel. — Lamento mucho.

Sr. Bunge. — Entiendo que eso significa un costo de 2 por ciento, pero declaro que puede ser inferior o superior. Tomando eso como bueno, llegaremos a un suplemento total del 6 al 7 por ciento del salario. La indemnización en caso de fallecimiento es un suplemento pequeño, porque si suponemos una mortalidad — grosera, y grosero promedio — de uno por ciento anual durante 30 años, y que la to-

talidad de los que fallezcan, lo hagan a la mitad de un período de 30 años, la indemnización sobre un promedio de 200 pesos mensuales de sueldo ascendería a una suma de 7 a 8 sueldos mensuales en promedio, cuya prima, como se trata de un seguro temporario que no requiere reservas elevadas, no excedería de un por ciento de la cantidad asegurada; es decir, que sería ligeramente inferior al uno por ciento de los sueldos. Sumando todo eso tendríamos, en un cálculo conjetural, un total de suplementos de salario, del 8 por ciento.

Yo sostengo que, por la dura ley de la economía individualista, en épocas de crisis no podemos decretar aumentos de salario de 8 por ciento sin correr el riesgo de que sean pagados por los mismos beneficiarios en otra forma porque todas las correas tienen que salir del mismo cuero, porque las empresas capitalistas no sólo pueden, sino que están obligadas, por la ley de la competencia, a reducir sus costos de producción al extremo límite.

No simpatizo con los beneficios por antigüedad. He votado con agrado el derecho al sueldo íntegro en caso de enfermedad, a pesar de que es un mal sistema establecer una relación individual de empleado a empleador para ese derecho; pero como no tenemos el seguro de enfermedad, ese será un paso importante para meter en la cabeza de los empleadores, que deben contribuir a la asistencia médica y pecuniaria de los empleados y obreros que se enferman, por medio del seguro social.

Habría preferido, con mucho, que en vez de acordarse derechos por antigüedad se hubiera establecido, por ejemplo, la indemnización del sueldo íntegro para todos, sea cual fuere su antigüedad, después de un año de carencia, digamos, durante tres meses, y también para todos, de medio sueldo durante otros tres meses.

He dicho que no simpatizo con los beneficios por antigüedad, porque ellos tienden a limitar el libre tránsito, tienden a sujetar al personal a la empresa individual, y tienden así a trabarlo en

la libertad de disposición de su fuerza de trabajo para buscar otra ocupación, porque perdería al abandonar ese empleo los beneficios adquiridos en esa casa por antigüedad.

La experiencia universal demuestra que todo lo que sea beneficio que un empleador individual acuerda a sus obreros por concesión personal, o que deba otorgar por ley, atenta a la libertad de tránsito. Por esta razón, el movimiento obrero del mundo, reclama que todos los beneficios de carácter social no pesen individualmente sobre los empleadores sino sobre la clase capitalista colectivamente considerada y organizada, bajo el control de los propios obreros.

En este caso, tengo razones muy serias y fundadas, para temer que salgan de los propios sueldos y salarios los suplementos de hecho que acuerda la ley, porque los empleados de comercio están miserablemente organizados, no tienen una organización que pueda resistir las imposiciones patronales, quienes están organizados.

Quando aludí a esto ayer en términos generales, no conocía dos hechos que me acaban de relatar los señores diputados González Maseda y Pinedo. Al señor diputado González Maseda lo han visto hoy empleados de una gran casa, que me ha pedido que no la nombre, pero que yo francamente desearía nombrarla, y si alguien me lo pide lo haré...

Varios señores diputados. — Nómbrala.

Sr. Bunge. — La casa Gath y Chaves. Le han manifestado que los dirigentes de la casa comunicaron al personal antiguo que en caso de sancionarse esta ley con la antigüedad, les exigirán la presentación de sus renunciaciones para nombrarlos inmediatamente como empleados nuevos, con el fin de eludir el pago.

Sr. Dickmann (A.). — Está prevista esa maniobra y la ley la impide...

Sr. Bunge. — Bueno, yo la denuncio...

Sr. Dickmann (A.). — Hace la denuncia antes de tiempo.

Sr. Presidente (Cafferata). — Ruego al señor diputado que no interrumpa.

Sr. Bunge. — La hago para prever. Es el momento de hacerla.

Sr. Martínez (J. H.). — Sería la maniobra más tonta e ingenua que pueda darse.

Sr. Bunge. — Agradecería a los señores diputados que no me interrumpieran, porque estoy en malas condiciones físicas...

Sr. Dickmann (E.). — Tonta y de mala fe.

Sr. Presidente (Cafferata). — No interrumpa el señor diputado.

Sr. González Maseda. — No hay mala fe. Aseguro a la Cámara que empleados de comercio en plena actividad en una casa de comercio de Buenos Aires han conversado conmigo hoy mismo, y me han dicho que en la casa Gath y Chaves — donde entre paréntesis acaba de quitarse a los empleados el sábado inglés de que gozaban — se proponían hacer tal cosa y me han preguntado qué podríamos hacer los diputados para evitarlo. He tenido que decirles: lo único que se puede hacer es establecer alguna disposición en la ley.

Sr. Dickmann (E.). — Está.

Sr. González Maseda. — Pero no alegue mala fe el señor diputado.

Sr. Martínez (J. H.). — No ha dicho eso el señor diputado.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente.

Sr. Presidente (Cafferata). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital y la Presidencia le ruega que no acepte interrupciones.

Sr. Bunge. — Le he pedido al señor presidente que no las consienta.

Sr. Presidente (Cafferata). — La Presidencia ha advertido a los señores diputados.

Sr. Bunge. — Y si he admitido la interrupción del señor diputado González Maseda ha sido por la impertinencia de que ha sido objeto.

Sr. Oddone. — No han entendido lo que ha dicho el señor diputado. No ha aludido a él sino a la casa.

Sr. Bunge. — ¡Ah!

Uno de los directores de la casa Elías Romero — que no es sospechosa, señor diputado, porque encabeza el movimiento en favor del sábado inglés, para impedir que le hagan competencia desleal las grandes tiendas que lo tenían hasta hace poco y lo han suprimido — le ha manifestado al señor diputado Pinedo que además de luchar la casa por el sábado inglés, entrega la mayor parte de sus utilidades al personal. El año pasado ha repartido entre el personal, en proporción a la remuneración de cada uno, el 92 por ciento de las utilidades. No es, por consiguiente, una casa sospechosa, y esta casa no ha criticado el derecho reconocido por la ley, porque una casa que hace tantos gastos, evidentemente no va a estar en ese miserable regateo de los dos y medio o de los cinco meses; pero ha dicho que la mayor antigüedad es lo que más puede perjudicar a la ley con respecto al conjunto del comercio.

Ha argumentado el señor diputado que los suplementos votados carecen de importancia frente a los gastos enormes que hacen siempre las casas, como por ejemplo los gastos de publicidad. Es un argumento infantil, señor presidente: las casas comerciales rivales no tienen más remedio que hacer publicidad para poder vender. De la publicidad viven entonces los empresarios y vive el propio personal que trabaja en ellas. Si no hicieran esa publicidad, serían desalojadas en las ventas por las casas que la hacen. En un régimen de competencia, como es nuestro régimen de economía individualista, la necesidad de la publicidad es como la necesidad de pagar enormes alquileres. Está estudiado por economistas ingleses que el alquiler de los pisos de negocios es estrictamente proporcional al número de pasantes delante de las vidrieras, porque las probabilidades de venta y la cantidad de artículos vendidos, son proporcionales a ese número de pasantes. Con el criterio del señor diputado, podría argumentarse que las casas de comercio pagan enormes alquileres y

reducirían sus gastos yendo a instalarse en los nuevos mataderos.

Señor presidente: mi punto de vista, consecuente con lo sostenido en toda mi vida política, es que para salvar un principio de carácter permanente, debemos en ciertos casos sacrificar lo menos, porque lo importante es el régimen de carácter permanente. Y de eso se trata en esta sanción: de evitar que la ley pueda recaer en el primer momento en perjuicio de aquellos a quienes queremos beneficiar. Por eso, por tratarse de un período de crisis, en que la fuerza patronal organizada se encuentra frente a una fuerza obrera y de empleados desorganizada, creo que debiéramos ser prudentes en acordar esos beneficios, y en este caso establecer el régimen de transición que implica limitar la antigüedad a cinco años.

Sr. Aguirrezabala. — Hago indicación de que se vote.

Sr. Dickmann (E.). — Pido la palabra para decir muy pocas.

Sr. Presidente (Cafferata). — ¿El señor diputado hace moción de cerrar el debate?

Sr. Aguirrezabala. — No, señor presidente; pero ha habido diputados que han hablado tres veces sobre este aspecto del asunto.

Sr. Dickmann (E.). — Estamos en la discusión en particular.

Sr. Presidente (Cafferata). — El reglamento lo autoriza, señor diputado, en la discusión en particular.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Dickmann (E.). — Señor presidente: al referirme a los argumentos del señor diputado doctor Bunge en su exposición de ayer, no he dicho todo lo que tenía que decir. Y por no haber dicho todo lo que tenía que decir, he soportado una retahila de argumentos capciosos del señor diputado, que en esta materia bate el récord de sabiduría superficial y barata.

Según la teoría del señor diputado por la Capital, no hay posibilidad de ninguna mejora, ni de salario, ni de jubilación, ni de indemnización...

Sr. Bunge. — He derrotado al señor diputado en un congreso del partido haciendo triunfar el principio del salario mínimo. Y he sido injuriado por esa razón por el señor diputado.

Sr. Presidente (Cafferata). — Sírvase no interrumpir al señor diputado por la Capital.

Sr. Dickmann (E.). — Llámeme al orden, señor presidente. Póngale bozal y retranca a este diputado. *(Risas)*.

Teóricamente, señor presidente, la exposición del señor diputado es inconsistente, porque el señor diputado — es asombroso — sostiene que en el régimen actual individualista no se puede hacer nada.

Sr. Bunge. — No es cierto.

Sr. Dickmann (E.). — El promete todo para cuando el régimen individualista y capitalista desaparezca.

Sr. Bunge. — No es cierto.

Sr. Presidente (Cafferata). — No interrumpa, señor diputado.

Sr. Dickmann (E.). — Se parece así a ciertos católicos que de buena fe prometen el cielo y consideran a la tierra como un valle de lágrimas. *(Risas)*.

En el régimen que el señor Bunge supone, se podrá hacer todo; ahora no se puede hacer nada. Pero se trata de una diferencia, no de fondo, sino de forma; se trata de cinco o de diez medios meses, de cinco o diez años. ¿Sobre eso se puede hacer una incidencia teórica? El señor diputado Courel, demócrata de Córdoba, es mucho más progresista, en este caso, que el señor diputado socialista independiente por la Capital *(risas)*: ha sostenido con argumentos ilevantables que los diez años no son una carga insoportable para el comercio, mientras que el señor diputado por la Capital se ha empeñado en demostrar que va a ser la ruina del comercio.

Sr. Sierra. — De los empleados; hay una pequeña diferencia.

Sr. Dickmann (E.). — ¡Pero, señor diputado! ¿Para los empleados será la ruina lo de los diez años? ¿Cree el señor diputado eso sinceramente, honestamente?

Sr. Sierra. — No es eso.

Sr. Dickmann (E.). — Es absolutamente inadmisibles esa argumentación. Hay que descargarla de su aspecto teórico. Se trata de un aspecto práctico que los buenos comerciantes aceptan. En su exposición los señores comerciantes Saint no objetan los diez años, objetan en general toda la economía de la ley, y hacer por un diputado llamado socialista independiente la suma de todos los beneficios y pretender demostrar a la Cámara que esa es una carga insoportable, es conspirar fundamentalmente contra toda la ley.

Yo no sé si la casa Gath y Chaves, lanzada aquí en el recinto, ha dicho a los empleados lo que se ha expresado. Quiero creer que no, por la seriedad de esa casa, pero si eso se hubiera hecho, está previsto en la ley su imposibilidad.

Se me ha informado que algunos comerciantes han obligado a los empleados a firmar renunciaciones sin fecha. Es posible, pero cabría en la ley alguna disposición también para evitar esas maniobras dolosas, porque hecha la ley hecha la trampa. No pueden, asimismo, pesar sobre el criterio de los legisladores, para reducir los beneficios los argumentos de los malos patrones. Hago mucho más honor al comercio sano, serio, progresista, que no va a tratar de burlar una ley tan sana y tan progresista para el país. Quiero creer en la capacidad de progreso de nuestro comercio, y he dicho antes que se va a adaptar a la ley.

Considerar que son los empleados quienes van a salir perjudicados me parece un grueso error. Puede en alguno que otro caso, por maniobras dolosas, resultar perjudicado algún empleado; pero eso no puede ni debe ser la regla.

No voy a seguirlo al señor diputado por la Capital en toda su lucubración en los números, en las cifras, que él es maestro en amontonarlas hasta que nadie lo comprende para nada. (*Risas*). No lo he de seguir en ese terreno. Sostengo que se trata de un regateo mezquino de cinco o de diez medios meses. Espero de la inteligencia y del

corazón de los señores diputados que comprenderán que para empleados de veinticinco o treinta años, arrojados a la calle sin otro recurso, cabe entregarles una indemnización de diez medios meses, es decir, de cinco meses de sueldo.

Nada más.

Sr. Ruggieri. — Pido la palabra.

Deseo precisar, en muy pocas, los fundamentos del despacho de la comisión, en la parte que se discute.

Con las observaciones formuladas, de orden jurídico y de carácter económico, sobre las que se ha insistido esta tarde, se han mezclado divagaciones sobre puntos y conceptos que nada tienen que hacer con este proyecto de ley.

En esa confusión de opiniones se ha llegado hasta el exceso de considerar demagógica la limitación a diez años de la antigüedad en el servicio, anterior a la sanción de la ley, y, precisamente, por los que, a mi juicio, están en condiciones menos favorables para hacer esa calificación.

A la comisión llegaron dos proyectos sobre esta misma materia; uno, el conocido del diputado Adolfo Dickmann, y otro del diputado González Maseda, firmado también por otros compañeros de su sector. En los dos proyectos se establece la indemnización de un mes de sueldo por cada año de servicios, sin limitación alguna en la antigüedad. Llamo la atención sobre esta circunstancia, y también sobre la de que al señor diputado González Maseda lo acompañan en la firma de su proyecto los abogados más expertos del sector a que pertenece.

Quiere decir, entonces, que si la comisión hubiera aceptado y la Cámara, desde luego, votado, cualquiera de esos dos proyectos, sin modificarlos, para fijar el monto de la indemnización por despido se habría tenido en cuenta toda la antigüedad del empleado anterior a la sanción de la ley, por simple aplicación de los principios generales del derecho civil y por las razones que tuve oportunidad de expresar cuando se discutió por primera vez este asunto, y que ayer ha precisado en forma con-

cluyente, el señor diputado por Mendoza doctor Vicchi. En síntesis, porque no se hubiera lesionado el principio de derecho civil sobre irretroactividad de la ley.

Como lo ha hecho notar el señor diputado por Mendoza, computar la antigüedad en el trabajo anterior a la sanción de la ley es sólo fijar un punto de referencia para determinar el monto de la indemnización. Si en lugar de tomar la antigüedad en el servicio se tuviera en cuenta la edad del empleado, ¿dónde ubicarían en este caso la doctrina de la irretroactividad los que pretenden ahora aplicarla?

La comisión, sin prejuicios de sectores, redujo la indemnización de un mes a medio mes de sueldo, rebajando con eso sólo la mitad de lo que prometían también los señores diputados socialistas independientes.

Sr. Bunge. — En nuestro proyecto no se establece indemnización por enfermedades comunes.

Sr. Ruggieri. — Eso ya lo establece el Código de Comercio y, por otra parte, lo reproduce el proyecto del señor diputado González Maseda, que según parece no ha leído el señor diputado...

Sr. Bunge. — Enfermedades profesionales y accidentes solamente.

Sr. Ruggieri. — Habla de enfermedades y accidentes inculpables en general...

Sr. Bunge. — Profesionales, señor diputado.

Sr. Dickmann (A.). — Si me permite el señor diputado...

Voy a hacer notar a la Honorable Cámara la actitud del señor diputado por la Capital en esta circunstancia. Nos ha imputado a nosotros la responsabilidad de la posibilidad de la disminución del sueldo a los empleados por esta ley. El señor diputado González Maseda, autor de un proyecto, ha establecido la indemnización de un mes de sueldo, sin limitación en el monto.

Sr. Bunge. — Sí, señor diputado.

Sr. Dickmann (A.). — En cambio, yo he limitado los sueldos comprendidos en los beneficios de esta ley a 500 pesos. ¿Quién conspira más contra el

comercio? ¿Quiénes tienen actitudes dobles?

—Varios señores diputados hablan simultáneamente.

Sr. Presidente (Cafferata). — Sírvanse no dialogar los señores diputados.

Sr. Ruggieri. — No acepto más interrupciones.

Sr. Sierra. — En ningún proyecto...

Sr. Presidente (Cafferata). — No tiene la palabra el señor diputado Sierra.

Sr. Sierra. — En ningún proyecto se ha considerado el problema de la retroactividad de la ley. En ningún proyecto, socialista o socialista independiente.

Sr. Ruggieri. — Efectivamente.

Sr. Sierra. — Hay que decirlo.

Sr. Ruggieri. — Es lo que acabo de destacar, señor diputado.

Sr. Presidente (Cafferata). — Sírvanse no dialogar los señores diputados.

Sr. Ruggieri. — Y vuelvo a rectificar al señor diputado Bunge, manifestando que no ha leído el proyecto de su compañero de sector, porque el artículo 1º se refiere expresamente, no sólo a las enfermedades profesionales, sino también a las comunes y a los accidentes imprevistos o inculpables, ocurridos o no en el trabajo.

Sr. Bunge. — Eso es lo que he dicho. Y es insignificante al lado de las enfermedades comunes.

Sr. Ruggieri. — Entonces no entiendo lo que quería rectificar el señor diputado.

Sr. Bunge. — Quería establecer que una cosa es la indemnización por enfermedad común y otra la indemnización por accidente o enfermedad profesional...

Sr. Ruggieri. — Lo sabemos todos.

Sr. Bunge. — ... que cuesta diez veces menos.

Sr. Ruggieri. — Lo sabemos todos.

Sr. Bunge. — ¿Por qué quiere confundirlas?

Sr. Ruggieri. — El señor diputado es el que confunde, porque su interrupción no aclara nada.

Decía, señor presidente, cuando fui interrumpido, que en el despacho de la comisión se rebajó la indemnización de un mes, que figuraba en los dos proyectos, a medio mes de sueldo por cada año de servicio.

Sr. Bunge. — Pero se crean otros beneficios.

Sr. Ruggieri. — Y después, señor presidente, limitamos la antigüedad anterior a la ley, a diez años, suprimiendo la indemnización que se prometía en los dos proyectos por los servicios que excedían de ese mínimo de tiempo.

—El señor diputado González Maseda hace una observación que no se alcanza a percibir.

Sr. Ruggieri. — Ahora, señores diputados, después de haber cercenado en esta medida tan apreciable los beneficios que se prometían, los autores de la mayor liberalidad pretenden hacernos pasar a los miembros de la comisión, y especialmente a los que hemos estudiado de verdad y con seriedad este asunto, como demagogos, cuando nuestra labor ha servido, precisamente, para cortar el vuelo de su limitada liberalidad.

Parecería, señor presidente, que a ciertos legisladores les acontece lo que a las alas de Icaro. Han comenzado a quemarse sus alas después de acariciar el sol de sus propias ilusiones. Y ya se sabe el peligro que corren los que se quedan sin alas después de haber remontado a grandes alturas.

Me explico, y hasta respeto, las opiniones contrarias a una mayor antigüedad en el servicio anterior a la sanción de la ley; pero no podemos admitir y rechazamos una calificación contradictoria con el proceso que ha seguido la elaboración de este proyecto.

Debo referirme, ahora, a otra contradicción, también inexplicable, en la que se ha insistido esta tarde, y que es uno de los argumentos fuertes del señor diputado Bunge. Acepto, ha dicho, la no limitación del tiempo en época normal, para justificar, desde luego, el proyecto de su compañero de sector;

y como esta no es una época normal, no sólo admite la limitación, sino que considera que es poca la establecida en el despacho de la comisión, reducida a diez años. Y yo pregunto, señor presidente, con el sentido común que solía retozar en las entrañas del buen Sancho, si desde la fecha de presentación de su proyecto, hace pocos meses, hasta ahora, se ha modificado tan fundamentalmente la economía nacional como para justificar los cambios radicales que se han operado en su manera de pensar.

Tampoco creo que la computación de una antigüedad mayor acelere lo que se ha dado en llamar aquí la política del despido. Es este un grueso error en el que han incurrido varios señores diputados. Reducir más el tiempo anterior de antigüedad es perjudicar al empleado sin ningún beneficio inmediato para el empleador.

El despido en esas condiciones obliga al principal al pago inmediato de una indemnización y los servicios de un nuevo empleado, que entraría gozando de una antigüedad de dos años a los fines de la indemnización que le correspondería en caso de despido, además de la inseguridad en la eficacia y aptitudes del reemplazante.

Sostenemos que cuanto menor es la indemnización inmediata del empleado, mayor es la facilidad que se acuerda a los empleadores para desarrollar su política de despido. A la inversa de lo que aquí se ha dicho, por un exceso evidente de imaginación.

Tampoco ha hablado la comisión de derechos adquiridos por antigüedad en el sentido jurídico que tienen en el idioma de la ley las palabras «derechos adquiridos». Nos referimos a hechos definitivamente producidos, no a hechos en expectativa, que podrán o no realizarse. Por eso el señor diputado por Mendoza debería dar a ciertas formas de expresión que ha usado el señor diputado por Córdoba, doctor Courel, el alcance preciso que realmente tienen.

Sr. Vicchi. — ¿Si me permite el señor diputado?

El señor diputado Ruggieri plantea la cuestión en sus verdaderos términos.

Sr. Ruggieri. — Por eso aclaraba, para conciliar las opiniones del señor diputado por Mendoza con la del doctor Courel.

Sr. Vicchi. — Pero quería explicar que a un hecho, la antigüedad que no se ha tomado en cuenta por la legislación anterior, no se puede dar un alcance indefinido en el período por la actual, que recién la consagra como un derecho. Esa es la posición nuestra y es también la del señor diputado.

Sr. Ruggieri. — Yo la he comprendido, señor diputado, y he hecho esta tarde el elogio a su exposición de ayer.

Sr. Vicchi. — Muchas gracias.

Sr. Ruggieri. — Por último, no creemos que se imponga una carga demasiado onerosa al comercio, por lo imprevista. Estabilizando al empleado, los principales tendrán tiempo más que suficiente para organizar sus cajas de previsión o sus asociaciones patronales de seguros, afrontando de esa manera, sin perturbación alguna para sus negocios, los futuros despidos.

Hago notar, por último, que la comisión ha realizado un verdadero esfuerzo para conciliar todos los intereses en pugna. Ha reducido a la mitad la indemnización de los primitivos proyectos y ha limitado a diez años la antigüedad anterior a la sanción de la ley. Puede afirmarse que se han reducido, en este punto, en un 60 por ciento los beneficios que prometían los proyectos anteriores. No es justo, entonces, que después de haberse obtenido de la comisión concesiones tan importantes, se insista ahora en otras nuevas en el recinto, a nuestro modo de ver injustificadas.

Por estas razones, mantenemos en toda su integridad esta parte del despacho.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*).

Sr. Aguirrezabala. — Hago indicación de que se vote.

Sr. Dickmann (E.). — Pido que la votación sea nominal.

Sr. Presidente (López). — Ha solicitado la palabra con anterioridad el

señor diputado Briuolo, quien puede hacer uso de ella.

Sr. Briuolo. — Quiero hacer constar, en contra de algunos argumentos esgrimidos ayer y en parte hoy, para sostener la reducción de la antigüedad de diez años que reconoce a los efectos de la indemnización el despacho de la comisión, que se ha insistido hoy en decir que eso constituye en estos momentos una traba para el comercio en general, olvidándose, al parecer, la idea central de esta ley. Se toma el fenómeno más en sus efectos que en su causa. La ley que discutimos no es una ley de indemnización: es una ley que tiende, con su articulado, a salvar, apuntalar y asegurar la estabilidad de los empleados meritorios.

Se han emitido aquí expresiones casi despectivas para la antigüedad. No hablarían así los señores diputados si a la vez fueran industriales o comerciantes; no hablarían así, porque la antigüedad significa en la mayoría de los casos, eficiencia, confianza, diligencia. Los malos empleados no duran en ninguna parte. Y el premio de estos buenos empleados, después de veinticinco o más años de servicios, es darles apenas un poco más de lo que les acuerda actualmente el Código de Comercio: dos meses y medio como indemnización.

Quiero traer a colación el caso de un empleado con treinta años de servicios, de cuarenta y cinco a cincuenta años de edad, a quien se le despide por razones diversas. Ese hombre ha de ir a engrosar la falange de los obreros y empleados desocupados o de lo que nosotros llamamos paro forzoso. Hay, además, esta circunstancia que apuntar. Comúnmente, estos empleados, a pesar de la diligencia y eficiencia demostrada en su puesto por la gran práctica adquirida en el mismo, son los que tienen mayor dificultad para encontrar trabajo o empleo. Y el señor diputado Bunge olvida eso para decir que esta indemnización fomentará el paro. Sostengo lo contrario, es decir, lo mismo que ha manifestado el señor diputado Ruggieri. Digo lo siguiente: la indemnización mayor re-

duce en proporción mayor la desocupación y la cesantía. Es evidente. En realidad, esta indemnización es algo así como impuesto al arbitrio o capricho de algunos señores patronos o empleadores. No es ésta propiamente una ley que impone penalidades, multas o impuestos a una función normal y regular. El despido por el que se indemniza es, precisamente, aquel que está sometido al arbitrio o capricho. Es por esto que el sentido social de la reforma es mucho más amplio, más lógico y más eficiente, en verdad, cuando se reconoce la antigüedad de diez años y no la de cinco.

Quería formular estas observaciones, porque me parece que en el debate, a pesar de la amplitud y lucidez que ha tenido, el caso de la cesantía de un empleado de cuarenta y cinco a cincuenta años no ha sido contemplado, y es sabido que, por desgracia, no hay ningún impedimento legal que impida a los señores industriales o grandes comerciantes, que traben el rechazo de postulantes de trabajo o de empleo que pasen ya de 40 ó 45 años. Son muchas las empresas y comercios que ya no toman a hombres de esa edad. Por eso señalo yo que, cuando se tienen servicios de 20, 25 ó 30 años, fatalmente se está por sobre los 40 ó 50 de edad, y son precisamente éstos a los que les será muy difícil que encuentren ubicación en cualquier otra parte. Esos son los que engrosarán las filas de los desocupados; es éste el caso de paro forzoso propiamente dicho, porque no tienen ninguna esperanza ni perspectiva de hallar nuevamente trabajo, sino en casos realmente de excepción.

Sr. Dickmann (E.). — He propuesto que la votación sea nominal.

Sr. Courel. — Vuelvo a manifestar, en nombre de la comisión, que ésta acepta que el inciso pase a ser el final del artículo 160.

Sr. Dickmann (A.). — Pero que se vote ahora.

Sr. Courel. — Como inciso 3º.

Sr. Groppo. — Que se vote ahora.

Sr. Courel. — Sí, señor diputado, que se vote ahora.

Sr. Presidente (López). — La Presidencia desea saber si es suficientemente apoyada la indicación de votación nominal.

—Resulta suficientemente apoyada.

Sr. Presidente (López). — Se va a votar el despacho de la comisión.

Sr. Dickmann (E.). — Despacho de la comisión, que se refiere a los 10 años.

Sr. Presidente (López). — Sí, señor diputado, a los 10 años.

Se va a votar nominalmente.

Sr. Aguirrezabala. — Producida la discrepancia de criterio de los distintos diputados que han hablado con relación a los años a que ha de referirse la retroactividad de la ley, votaré por lo que sea más liberal, con relación a las personas a las que esta ley va a beneficiar. Votaré, pues, el despacho de la comisión.

Sr. Groppo. — Para aclarar la votación, se entiende que los que estén por la afirmativa votan el despacho de la comisión.

Sr. Presidente (López). — Sí, señor diputado; se procederá en esa forma.

—Practicada la votación nominal:•

Sr. Prosecretario (Cullen). — Han votado 126 señores diputados: 49 por la afirmativa y 77 por la negativa, en la siguiente forma:

—Por la afirmativa, los señores diputados: Agüero, Aguirrezabala, Argonz, Becerra, Besasso, Bogliolo, Bosano Ansaldo, Briuolo, Buira, Buyán, Castellanos, Castiñeiras, Cortés Arteaga, Courel, Da Rocha, Dickmann (A.), Dickmann (E.), Ferreira, Ganza, Ghioldi, Giménez, Harispe, Herrera, Inda, Iribarne, Lamesa, Loredó, Magris, Martella, Mayo, Molina, Moret, Mouchet, Navello, Nigro, Oddone, Palacín (J.), Palacín (M.), Palacín (P.), Palmeiro, Pena, Pérez Leirós, Pflieger, Pietranera, Pressacco, Repetto, Ruggieri, Solari y Vidal Baigorri.

—Por la negativa, los señores diputados: Abalos, Acosta, Ahumada, Alon-

so, Amoedo, de Andreis, Aráoz (E. M.), Aráoz (J. I.), Bermúdez, Biancofiore, Bordabehere, Bunge, Bustillo, Cárcano, Castro, Colombres, Contte, Cornejo Arias, Corominas Segura, Coronel, Costa Méndez, Costanti, Duhau, Escobar, Fresco, Frías Silva, Giusti, Godoy, Gómez, González (B. S.), González Guerrero, González Maseda, Groppo, Guglielmelli, Lazo, Lima, Luján, Maglione, Manacorda, Mancini, Martínez (E.), Martínez (J. H.), Mattos, Messo-ne, Moreira, Morrogh Bernard, Moyano, Noble (R. J.), Ortiz Basualdo, Palacio, Palisa Mujica, Parera, Pereira, Pinedo, Pintos, Pomponio, Pueyrredón, Quiroga, Radío, Rojas, Ruiz Guiñazú, Saggese, Salas, Salcedo, Santillán, Schoo Lastra, Sierra, Simón Padrós, Solís, Speroni, Tourrés, Uriburu, de la Vega, Vicchi, Vionnet, Zalazar Altamira y Zarazaga.

Sr. Presidente (López). — Queda rechazado el apartado.

Se votará en la forma indicada por el señor diputado Vicchi, que se va a leer.

Sr. Secretario (González Bonorino). La proposición del señor diputado Vicchi dice: «A los efectos de la indemnización establecida por el artículo 157 del Código de Comercio, la antigüedad en el servicio anterior a la sanción de esta ley, sólo se reconocerá hasta un límite máximo de cinco años.»

Sr. Ruggieri. — En realidad debería decir la primera parte: «A los efectos de la indemnización por despido», porque es sobre esto que se ha discutido. La indemnización por falta de preaviso es sólo de uno o dos meses de sueldo, según que la antigüedad del servicio sea menor o mayor de cinco años.

Sr. de la Vega. — Se debe votar en los mismos términos de la votación anterior.

Sr. Ruggieri. — Es una omisión involuntaria. Se refiere a la indemnización por despido. No tiene nada que hacer aquí la indemnización por falta de preaviso.

Sr. de la Vega. — Se está votando. No le doy importancia a la observación del señor diputado...

Sr. Ruggieri. — ¡Cómo no la va a tener!

Sr. de la Vega. — Se vota en los mismos términos que la votación anterior.

Sr. Vicchi. — Mantengo mi proposición.

—Se vota y resulta afirmativa.

Se lee:

En caso de muerte del empleado, el cónyuge, los descendientes y los ascendientes, en el orden y en la proporción que establece el Código Civil, tendrán derecho a la indemnización por antigüedad en el servicio, limitándose para los descendientes a los menores de 22 años y sin término de edad cuando están incapacitados para el trabajo.

Sr. Ruggieri. — Pido la palabra.

Señor presidente: iba a hacer una observación, antes de entrar a considerar este nuevo apartado, y que se refiere al inmediatamente anterior del que se acaba de votar. Es el relativo al privilegio que acordamos a estas indemnizaciones.

El despacho de la comisión establecía el privilegio general sobre los bienes del deudor. Sin modificar este concepto del despacho, el señor diputado por Córdoba, doctor Martínez, propuso que se precisara el carácter del privilegio, indicando que sería el establecido para los sueldos o salarios de los factores o dependientes: es decir, privilegio de carácter general y en el orden establecido en el artículo 94, inciso 4º de la ley de quiebras. Pero la redacción de este nuevo agregado podría dar lugar a interpretaciones extrañas al propósito del autor de la proposición y de la Cámara al votarla.

El inciso 4º del artículo 94 establece, además del carácter del privilegio, una limitación a los últimos seis meses de trabajo, de suerte que si se interpretara este agregado como pretendiendo aplicar también la segunda parte de dicho inciso, el privilegio sólo cubriría la indemnización equivalente a un solo mes de sueldo, que es la que correspon-

de a seis meses de trabajo. Si se aplicara esta interpretación, señor presidente, se burlarían inicuaamente los derechos de los empleados, suprimiéndose de hecho la indemnización cuando hay concurrencia de créditos, en beneficio de los demás acreedores, aun de aquellos que no gozan para sus créditos de ninguna clase de privilegios.

Es para evitar el desplazamiento del propósito legislativo que propongo volver a la redacción anterior del despacho, que es la que corresponde, de acuerdo con los artículos 90 y 94 de la ley de quiebras, en cuanto definen el carácter general del privilegio. En una palabra, quedaría el apartado como figura en el despacho, pero añadiéndole lo que proponía el señor diputado, con esta leve modificación de forma: «y en el grado establecido en el artículo 94, inciso 4º de la ley de quiebras.» Quedaría aclarado el pensamiento del señor diputado, evitándose interpretaciones erróneas.

Sr. Martínez (J. H.). — Pido la palabra.

No creo que al agregado que propuse en la sesión de ayer pueda dársele por los encargados de aplicar la ley una interpretación distinta a la que realmente tiene y que surge claramente de las palabras empleadas en su expresión. Pero me place la indicación del señor diputado por la Capital porque si alguna duda hubiera quedado con la redacción expresada, tanto con las palabras que ha pronunciado el señor diputado por la Capital como con las que pronuncio en este momento, van a quedar completamente despejadas.

Sr. Parera. — ¿Me permite el señor diputado una interrupción?

Sr. Martínez (J. H.). — Le rogaría que hablara al final, porque seré muy breve.

Sr. Parera. — Es que con esto tal vez cortaríamos la discusión. Con aclaraciones...

Sr. Martínez (J. H.). — Queremos aclarar con el señor diputado por la Capital este asunto. Entre dos vamos a

aclarar muy bien a la Cámara, pero entre muchos no, porque se produce siempre una babel en las discusiones.

La Honorable Cámara ha votado ayer un privilegio para las indemnizaciones que se establecen por el artículo 157. Es evidente que el privilegio es para el conjunto de la indemnización: toda la indemnización que se acuerda por el artículo referido goza de un privilegio general.

En lo único que se disintió, y en lo que ha estribado mi intervención, es en la colocación de ese privilegio dentro del orden establecido ya por el Código de Comercio, que, como es natural, establece distinguos según la naturaleza e importancia de los mismos. El primero es para los gastos de seguridad de los bienes, administración de la casa fallida, diligencias judiciales, etcétera; el segundo es para los gastos funerarios; el tercero es para los gastos de la última enfermedad. En cuanto al cuarto antes de la creación de este privilegio especial para la indemnización, era exclusivamente para los salarios de los factores, dependientes y empleados del fallido u obreros que haya empleado directamente por los seis meses inmediatamente anteriores a la declaración de quiebra. Es decir, que estos salarios sólo tienen privilegio cuando son de seis meses anteriores; el resto no.

Por lo tanto, al incorporar en este inciso 4º del artículo 94 de la ley de quiebras el privilegio establecido a la indemnización que se crea en el artículo 157, debe entenderse que es por la totalidad de la indemnización. La referencia al inciso 4º es únicamente en cuanto al grado del privilegio y al orden en que debe estar establecido.

Creo que con estas palabras ha de considerarse satisfecho el señor diputado por la Capital, porque después de las que él ha pronunciado y de la aclaración que acabo de hacer como autor del agregado que se votó ayer por la Cámara, no puede caber la menor duda al respecto.

Nada más.

Sr. Parera. — Pido la palabra.

En materia de privilegio, con simples palabras o aclaraciones de esta índole no vamos a resolver nada ni fijar los alcances de la ley. El privilegio resultará de la ley misma, no de estas aclaraciones. Entiendo que el señor diputado Ruggieri tiene razón; la ley debe ser expresa.

Sr. Martínez (J. H.). — Pero la ley es expresa, porque ya he dicho categóricamente, y la Cámara lo ha votado, que esta indemnización tiene el privilegio general que acuerda el inciso 4º del artículo 94 de la ley de quiebras. Lo único que ha preguntado el señor diputado Ruggieri es si el privilegio cubre toda la indemnización o sólo parte de ella, dado que ese inciso citado se refiere a una parte del salario y no a la totalidad del mismo.

Sr. Parera. — Podríamos estar a la recíproca con el señor diputado, que me interrumpe ahora.

Sr. Martínez (J. H.). — Le pido disculpas.

Sr. Parera. — La interpretación en esta materia debe ser restrictiva. Lo dice expresamente el Código Civil y lo consagra la doctrina. *Pas de privilège sans texte*, enseña Laurent.

Si el privilegio de la ley no resulta claro, los jueces no tendrán en cuenta para nada las aclaraciones hechas en el debate y no reconocerán su existencia. Si la totalidad de la indemnización debe, en mucho, tener privilegio, debe decirlo la ley. En ese sentido comparto la opinión del señor diputado Ruggieri, y viene a confirmarse lo que dije ayer cuando expresé que la aclaración o enmienda del señor diputado por Córdoba no resolvería la dificultad y que bastaba referirse al privilegio general, sin necesidad de referirnos a la disposición tal o cual del Código de Comercio o del Código Civil.

Sr. Martínez (J. H.). — La Cámara, en contra de la opinión, desde luego muy autorizada, del señor diputado, ha considerado que eran atinentes mis observaciones y ha votado casi por unanimidad el agregado que yo propuse.

No bastaba la manifestación de que estas indemnizaciones gozaban del privilegio general que establecía el primitivo despacho, porque el privilegio general tiene distintos grados y era necesario entonces establecer privilegio en uno de esos grados. Mi proposición fué justamente a ello, a establecer que en caso de quiebra dentro del privilegio general esa indemnización estaba en el cuarto grado.

Ahora, en lo que respecta a la manifestación del señor diputado de que las palabras no tienen ninguna importancia en la interpretación de la ley, disiento fundamentalmente en ello.

Sr. Parera. — En materia de privilegios.

Sr. Martínez (J. H.). — Y de cualquier otra. La Cámara ha votado estas palabras en castellano: «Estas indemnizaciones gozarán del privilegio establecido en el artículo 94, inciso 4º de la ley de quiebras.» Quiere decir que es un privilegio general sobre los bienes del deudor.

Sr. Parera. — Pero como ese inciso se refiere a seis meses...

Sr. Martínez (J. H.). — La única duda es ésta: que como ese inciso se refería también a los salarios de los dependientes y factores, pero limitados esos salarios — no estas indemnizaciones — a los seis meses últimos, podía haber alguna duda de que por analogía —, no por interpretación directa, sino por analogía y un poco casuística —, se interpretara que la indemnización era sólo por los últimos seis meses.

Por eso era atinada la observación del señor diputado por la Capital; pero aclarado que esto no se puede interpretar sino en la forma indicada y ante el texto gramatical que dice: «Esta indemnización», no puedo creer que ningún juez —, que tiene forzosamente que leer esta discusión para interpretar la ley —, pueda sostener que cuando se ha votado «esta indemnización», es decir toda la indemnización, sólo se comprenda una parte de ella.

Ahora, si todavía los señores diputados tienen tan poca fe en la interpre-

tación de los jueces, del país, yo no tengo ningún inconveniente en que se aclaren aún más esas palabras, que las creo de por sí bien claras.

Sr. Parera. — Recojo la observación del señor diputado Ruggieri y creo que la aclaración en la ley no está nunca de más, porque el criterio de interpretación en esta materia tendrá forzosamente que ser restrictivo.

Sr. Ruggieri. — Pido la palabra.

Hubiera sido preferible la reconsideración de esta parte del despacho y votarla en la forma que había propuesto; pero después de las manifestaciones del señor diputado autor de la proposición, tan claras y concluyentes, que no autorizarán una interpretación distinta a su pensamiento y al de la Cámara al votarlo, desisto con toda satisfacción de lo que había propuesto hace un momento.

Sr. Parera. — No seré más papista que el Papa. Por mi parte, si el señor diputado no insiste en su moción, tampoco insisto.

—Se lee:

En caso de muerte del empleado, el cónyuge, los descendientes y los ascendientes, en el orden y en la proporción que establece el Código Civil, tendrán derecho a la indemnización por antigüedad en el servicio, limitándose para los descendientes a los menores de veintidós años y sin término de edad cuando están incapacitados para el trabajo. A falta de esos parientes, serán beneficiarios de la indemnización los hermanos, si al fallecer el empleado vivían bajo su amparo, y dentro de los límites fijados para los descendientes. Se deducirá del monto de la indemnización lo que los beneficiarios reciban de cajas o sociedades de seguros por actos o contratos de previsión realizados por el principal.

Sr. Dickmann (A.). — Desearía saber si subsisten las observaciones formuladas en la sesión de ayer al último apartado. Si no subsisten, no tengo nada que decir en ese asunto.

Parece que las observaciones formuladas ayer han sido retiradas.

Sr. Pena. — Que se siga con el procedimiento anterior, con respecto a la votación.

Sr. Presidente (López). — Si no se hace observación, quedarán aprobados los párrafos que se acaba de leer.

—Aprobados.

—Se lee:

Artículo 158. — Será nula y sin valor toda convención de partes que reduzca las obligaciones determinadas en los tres artículos anteriores, las que registrarán también para los contratos de empleo a plazo fijo, en cuyo caso el preaviso será un mes, o dos o tres meses antes de la expiración del término convenido, según antigüedad en el servicio; considerándose que acepta la reconducción del contrato la parte que omita el preaviso.

Sr. Ruggieri. — Pido la palabra.

Propongo una corrección, que por olvido involuntario ha omitido la comisión en esta primera parte del artículo 158. Debe eliminarse el plazo de tres meses, que ya se ha excluido de la primera parte del artículo 157, al reducir los plazos a uno o dos meses, según la antigüedad en el servicio. El artículo debe decir que el preaviso «deberá darse uno o dos meses antes de la expiración del término convenido», etcétera.

Sr. Bunge. — Podría decirse que el preaviso se dará en el término establecido por el inciso b) del artículo 157.

Sr. Ruggieri. — Es lo mismo. Queda aclarado.

Sr. Presidente (López). — Se va a votar la parte del artículo 158, leída, con la modificación a que acaba de referirse el señor diputado por la Capital.

—Resulta afirmativa.

—Se lee y aprueba:

Cuando vencido el término expresamente estipulado en un contrato, el empleado — factor, dependiente, viajante, encargado u obrero — continúa en el trabajo, por tácita reconducción

o por un nuevo contrato, se le computará el tiempo de servicio anterior para determinar los períodos de licencia anual, el plazo de preaviso o la indemnización equivalente y el monto de la indemnización por antigüedad en el trabajo, de cuyo monto se deducirá lo que ya ha recibido, por el mismo concepto, a la terminación de los precedentes contratos. A los mismos efectos y en el caso de contratos por tiempo indeterminado, se computará el tiempo anterior cuando el empleado despedido reintegrese al servicio del principal, deduciéndose de la última indemnización por antigüedad lo recibido en igual concepto por despidos anteriores.

En caso de cesantía o de retiro voluntario del servicio, por cualquier causa, el principal estará obligado a entregar al empleado un certificado de trabajo, conteniendo las indicaciones sobre su naturaleza y antigüedad en el mismo.

—Sin observación se aprueba el artículo 159.

—Se aprueba:

Artículo 160. — Son causas especiales para despedir al empleado, y sin obligación para el principal de indemnizar por despido y por falta de preaviso, aunque exista contrato por tiempo determinado:

- 1º Los hechos previstos en el artículo 154 y todo acto de fraude o de abuso de confianza, establecidos por sentencia judicial;

Sr. Aráoz (J. I.). — Pido la palabra.

He hecho notar anteriormente que la comisión ha introducido un agregado al inciso 1º que puede ser perjudicial. Es el agregado que dice: «establecidos por sentencia judicial».

Quiero saber si esa sentencia es previa o posterior. Si ha de ser una resolución judicial previa, entonces resultaría que el empleado podría estar desempeñando sus funciones no obstante ser un delincuente. Si la sentencia ha de ser posterior, el agregado no tiene objeto porque es de derecho común.

Sr. Ruggieri. — La sentencia tiene que ser previa, señor diputado.

Sr. Aráoz (J. I.). — Entonces tendría que continuar el empleador con un delincuente en su casa durante meses.

Sr. Ruggieri. — Lo puede suspender sin despedirlo.

Sr. Aráoz (J. I.). — Sólo por tres meses, plazo que no se puede alterar porque es de orden público. Por eso creo que debiéramos dejar librada al derecho común esta cuestión.

Sr. de la Vega. — Pido la palabra.

Entiendo, señor presidente, que en realidad el articulado que propone la comisión no significa una alteración a la regla de derecho que actualmente existe, sino que establece un principio lógico: que en los casos a que se refiere el artículo la decisión final estará sometida a la sentencia de los tribunales de justicia cuando el empleado despedido por las causas que el enunciado explica no las acepta como reales.

Entretanto no se le puede imponer al principal que tenga a su servicio ese empleado, que para él ha abusado de su confianza o que es autor de un delito. Puede muy bien desprenderse provisionalmente de los servicios de ese empleado, el que, por consiguiente, de hecho no se encontrará al servicio de la casa de su principal. Pero todo esto, como es natural, queda en definitiva sujeto a las resultas de la sentencia judicial correspondiente, que va a regular en sus efectos finales las relaciones jurídicas entre el principal y sus empleados.

Creo que queda aclarado con estas manifestaciones el punto tratado por el señor diputado por Tucumán, doctor Aráoz.

Sr. Palacio. — Señor presidente: creo que quedaría bien aclarado el inciso si se suprimiera la última parte, donde dice: «establecidos por sentencia judicial». Así bastaría la comisión de fraude o de abuso de confianza para que inmediatamente rija la disposición del artículo.

Sr. Ruggieri. — ¿Pero quién va a

calificar eso, señor diputado? ¿El empleador?

Sr. Palacio. — Pero no se puede tampoco someter al empleador...

Sr. Ruggieri. — Por eso he aclarado que en ese caso puede suspenderlo sin resolver la cesación del contrato del empleo.

Sr. Palacio. — No dice la ley eso.

Sr. Ruggieri. — Pero hay que interpretar, señor diputado. No puede quedar librada a una de las partes la calificación de los hechos.

Sr. Palacio. — Pero tampoco puede exigirse al empleador que mantenga bajo su dependencia un individuo que ha cometido fraude o abuso de confianza.

Sr. Ruggieri. — He aclarado que en esos casos de excepción puede el empleador suspender al empleado en el servicio, sin resolver la cesación del contrato.

Sr. Aráoz (J. I.). — Pero por tres meses únicamente.

Sr. Palacio. — En tres meses no se ventila un juicio.

Sr. Ruggieri. — Claro que no.

Sr. Palacio. — Entonces el empleado que ha delinquido tendría derecho para volver.

Sr. Ruggieri. — Lo suspende, señor diputado, conservándolo en el puesto, como en los casos de enfermedad o de accidente.

Sr. de la Vega. — Es decir, reservándole en realidad el puesto, sujeto a las resultas de la sentencia judicial definitiva.

Sr. Presidente (López). — Estando suficientemente aclarado, se proseguirá considerando el resto del artículo.

—En discusión:

- 2º Incapacidad para desempeñar los deberes y obligaciones a que se sometieron, excepto cuando es sobreviniente a la iniciación del servicio.

Sr. Aráoz (J. I.). — Pido la palabra. Con muy buena intención, la comisión ha introducido este segundo in-

ciso que altera la regla del derecho común, como lo voy a demostrar.

En el derecho común, cuando a un individuo contratado le sobreviene alguna incapacidad absoluta o parcial, el contratante tiene derecho a dar por rescindido el contrato. Este caso es invertido por la comisión, con un propósito humanitario. Un individuo que se enferma por cualquier motivo, no podrá ser despedido y recibe la indemnización correspondiente, pero se ha olvidado la comisión que hemos establecido otra acción, la del derecho común, de tal manera que un empleado que tiene más de 500 pesos de sueldo, se encuentra en una situación extraordinaria: sin estar comprendido en la ley, puede hacer valer su excepción en contra de los propósitos que ésta persigue y en contra el derecho común.

Yo desearía que la comisión aclarase este punto, diciendo que la excepción introducida en el artículo no reza con los que pueden acogerse a las disposiciones del derecho común. Creo que esa es la intención de la comisión.

Sr. Ruggieri. — Está perfectamente bien, señor diputado.

Sr. Aráoz (J. I.). — No, señor diputado. Según el derecho común, cuando un empleado se incapacita, el empleador tiene derecho a rescindir el contrato. Este artículo cambia completamente esa disposición.

La comisión ha querido amparar al empleado modesto, de sueldo menor de 500 pesos, que por motivos de enfermedad puede quedar cesante, y ha dispuesto que se le pague la indemnización; pero como he dicho, la comisión ha olvidado que hay empleados que ganan mucho más de 500 pesos, y hasta miles, y que se van a amparar en esta ley de excepción.

Sr. Ruggieri. — Señor diputado: no se puede hacer el argumento de los altos sueldos, después de la limitación establecida en el artículo 157.

Sr. Aráoz (J. I.). — Estoy de acuerdo con el artículo, en cuanto a los sueldos menores de 500 pesos, pero es im-

posible aceptar que un factor o empleado de comercio que gana más de 500 pesos, tenga derecho no solamente a la indemnización sino también a la excepción de incapacidad sobreviniente en acciones del derecho común.

Deseo, únicamente, que se haga la aclaración, estableciéndose que los beneficios de esta ley se limitan exclusivamente a los empleados y obreros de sueldos menores de 500 pesos y sólo para los beneficios especiales establecidos.

Sr. Presidente (López). — La Presidencia desea saber si la comisión mantiene su despacho.

Sr. Ruggieri. — Señor presidente: éste es uno de los artículos que se han estudiado con mayor prolijidad por todos los miembros de la comisión. En consecuencia, lamento no poder aceptar la proposición del señor diputado.

Sr. Presidente (López). — Se va a votar el inciso 2º del despacho de la comisión.

— Resulta afirmativa.

— En discusión: 3º — Negociación por cuenta propia o ajena, sin expreso permiso del principal, cuando afecta los intereses de éste.

Sr. Maglione. — Pido la palabra.

Deseo solicitar de la comisión una aclaración, que puede facilitar la interpretación de la ley.

El señor diputado por Tucumán, al hablar de los factores, dependientes, viajantes, encargados u obreros, que menciona el primer artículo, preguntó si al decirse «viajantes de comercio» se hacía referencia a los ocupados exclusivamente por una casa comercial, pues podría un viajante hacer negocios por cuenta propia en perjuicio de la casa, y se le contestó que ese peligro no existía porque esa situación la contempla el artículo 3º. Hay la mayor parte de las casas comerciales que tienen viajantes que se ocupan de distintos artículos — y artículos de distintas casas — y que recorren la República a comisión. Yo desearía que la comi-

sión explicara si esos viajantes van a cobrar los beneficios que establece esta ley, si es que les alcanzan, a una sola casa o van a cobrar a todas las casas que representan.

Sr. Ruggieri. — Cobrarán exclusivamente a la casa que resuelva el despido.

Si un comerciante despide de su casa al viajante, ¿cómo se va a cargar a los otros principales la indemnización, si continúan utilizando sus servicios?

Sr. Maglione. — Entonces quiere decir que el viajante que representa a varias casas en comisión no está comprendido en los beneficios de esta ley.

Sr. Ruggieri. — Está comprendido. Pero en el caso de cesantía la indemnización sólo debe ser abonada hasta la suma que corresponde, por el principal que despide al viajante. Los demás no pagan, evidentemente.

Sr. Maglione. — ¿Y en caso de muerte, los beneficios que establece esta ley para el caso de muerte de los dependientes o factores? ¿Deberá repetirlos de todas las casas que representa un viajante?

Sr. Ruggieri. — ¡Pero, señor diputado! En los casos de muerte, cada principal pagará la indemnización que corresponda, de acuerdo a la remuneración abonada al viajante.

Sr. Maglione. — De acuerdo con la comisión.

Sr. Ruggieri. — Evidentemente.

Sr. Maglione. — Esa es la aclaración que deseaba, para saber si estaban comprendidos esos viajantes, o si se refería exclusivamente a los viajantes especiales empleados de las casas de comercio.

Sr. Ruggieri. — A toda clase de viajantes.

Sr. Maglione. — Por eso el señor diputado por Tucumán solicitó que se agregara la palabra «exclusivo», que no fué aceptada por la comisión.

Sr. de la Vega. — Pido la palabra.

Efectivamente, el punto que actualmente debatimos ha sido aclarado con motivo del debate habido en la sesión de ayer. Yo entiendo, de acuerdo con

lo que manifesté en esa oportunidad, que no hay sobre este punto ninguna dificultad, porque si el principal quiere tener viajantes exclusivos, depende de su voluntad imponer esta circunstancia; naturalmente, el viajante que, violando las órdenes de su principal, hiciera negociaciones por cuenta de terceros, no estaría — dentro del concepto con que yo interpreto el propósito de la comisión — no estaría habilitado para hacer uso de los derechos que acuerda este proyecto de ley.

En definitiva no veo la dificultad, porque el principal tiene los medios, mediante una prohibición para el viajante de realizar operaciones por cuenta de otras casas comerciales. Y el caso de infracción a estas instrucciones encuadra dentro de los casos que este mismo proyecto de ley establece para la exención de los beneficios que la misma ley acuerda.

De modo que me pareció oportuno hacer estas consideraciones con el propósito de aclarar el alcance del articulado que actualmente se debate.

Sr. Aráoz (J. I.). — Pido la palabra.

Creo que no es así como dice el señor diputado. Si hubiéramos respetado las normas comunes de derecho, tendría razón; pero la ley establece que no se puede renunciar a ninguna de sus prescripciones. De modo que un empleador puede tomar a un empleado con la prohibición expresa de que se ocupe de negocios propios o ajenos, pero siendo de orden público este artículo y el anterior, no tendría más remedio que tolerarlo, en caso de infracción, puesto que no lo podría despedir sin previas indemnizaciones.

Creo que es conveniente suprimir esto, porque la intención de los señores diputados no ha sido establecer que todo empleado de comercio tenga el derecho de negociar por cuenta propia o ajena, aun en contra de la voluntad del patrón.

Además, la disposición carece de objeto porque, al fin y al cabo, si el empleado tiene tiempo para trabajar por su cuenta o por la de otros pa-

trones sin hacer daño a su patrón lo hará.

Propondría, entonces, que se suprima esta disposición, porque trae inútilmente una cantidad de inconvenientes.

Sr. Courel. — La comisión mantiene el despacho.

Sr. Maglione. — Si me permite el señor diputado, yo plantearía el caso de un viajante que representa a tres o cuatro casas de un mismo ramo, perjudicando, con la venta de las mercaderías de una casa, a las de las otras. Las otras casas no tendrían el derecho de despedirlo sin darle las remuneraciones y beneficios que establece esta ley, y sin embargo sería un empleado que estaría perjudicando manifiestamente los intereses de la casa que representa.

Por eso creo que el término «viajantes» debe limitarse a los viajeros exclusivos de la casa.

Sr. Ruggieri. — La comisión mantiene su despacho, porque el concepto de «viajantes» ya ha sido votado en artículo anterior; por otra parte, hemos hecho una aclaración que satisface ampliamente los deseos del señor diputado.

Sr. Maglione. — Pero cuando entonces pidió la explicación el señor diputado por Tucumán se aludió a este inciso.

Sr. Presidente (López). — Como la comisión mantiene su despacho, se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

—En discusión el artículo 2º.

Sr. Bunge. — Pido la palabra.

Propongo a la comisión que acepte el agregado de algunas palabras que permitirán, sobre todo a las grandes empresas, contabilizar el personal y la remuneración del mismo en forma más moderna, más económica y más precisa que el anticuado sistema de los libros. Propongo que se diga que los empleadores estarán obligados a llevar un libro o fichero especial que tendrá numeradas todas sus fojas o fichas y

rubricadas o selladas por el Departamento Nacional del Trabajo.

Que quede bien destacado que la numeración puede ser hecha mecánicamente. No es indispensable que sean rubricadas a mano, sino que también pueden ser selladas mecánicamente por el Departamento Nacional del Trabajo.

Sr. Ruggieri. — Es un detalle técnico que podría dejarse para la reglamentación.

Sr. Bunge. — Es necesario establecerlo, porque si la ley habla de libros rubricados éstos no pueden ser sino encuadernados. Por eso yo propongo la opción, para así facilitar un mejor contralor. Nada mejor que un fichero numerado y rubricado o sellado en que se llevè por separado la contabilidad de cada empleado, como una especie de cuenta corriente.

Sr. Ruggieri. — ¿No cree el señor diputado que se corre el peligro de la substitución de fichas, substitución que no podría hacerse con los libros?

Sr. Bunge. — Tratándose de fichas selladas y numeradas por el Departamento del Trabajo, la substitución sería imposible y en todo caso incurriría en fraude quien la hiciera. Quizá podría agregarse que ese fichero será instrumento público, como lo he propuesto en la ley de accidentes del trabajo.

Sr. Ruggieri. — Como se trata de un asunto nuevo y es imposible consultar a todos los miembros de la comisión, no puedo comprometer opinión en su nombre.

Sr. Bunge. — Podría votarse por separado.

Sr. Ruggieri. — Primero debe votarse el despacho de la comisión, como viene redactado.

Sr. Martínez (J. H.). — Pido la palabra.

Voy a hacer una indicación de forma que quizá parezca un tanto trivial, pero que considero conveniente.

La ley se refiere a modificaciones del Código de Comercio y por eso comienzan su artículo 2º enumerando los artículos que se modifican. A continuación están las disposiciones que complementan esos artículos y que deben

ser incorporadas al Código de Comercio.

Yo sería partidario de que en vez de mencionar los artículos en orden consecutivo se pusiera 160, a), b), etcétera, con lo cual esta ley, cuando se haga una nueva edición del Código de Comercio, queda incorporada íntegramente y facilita su estudio y aplicación.

Es una cuestión insignificante, si se quiere, pero que mejora el despacho.

Sr. Ruggieri. — Creo que no es una cuestión insignificante la que plantea el señor diputado. Tiene su importancia. Había anotado, para una proposición exactamente lo mismo, abarcando los artículos 2º y 3º del despacho, incluyendo la substitución de las obligaciones impuestas a los empleadores por pólizas de seguro. Propongo, además, substituir las últimas palabras de este artículo 2º, donde dice: «los artículos del Código de Comercio que modifica la presente ley», por las siguientes: «los artículos anteriores». En esa forma se permite su incorporación al Código de Comercio.

Sr. Presidente (López). — Se va a votar el despacho de la comisión con el agregado del señor diputado por Córdoba, que se va a leer.

Sr. Secretario (González Bonorino). — «Incorpóranse al Código de Comercio los siguientes artículos...»

Sr. Ruggieri. — No es necesario decirlo, porque la primera parte del artículo 160 ya votado quedaría como inciso a); éste como b), y el artículo 3º como c), exactamente como se ha hecho con el artículo 157.

Sr. Presidente (López). — Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Sr. Bunge. — Pido que se voten por separado las palabras «o fichero», a continuación de «libro especial».

Sr. Ruggieri. — Entiendo que se ha votado el despacho de la comisión.

Sr. Pena. — Sin ninguna salvedad.

Sr. Presidente (López). — El despacho de la comisión se ha votado recién.

Sr. Bunge. — Sí, pero se puede vo-

tar luego el agregado. Estoy en mi pleno derecho al proponerlo.

Sr. Secretario (González Bonorino). — «Los principales están obligados desde la promulgación de esta ley, a llevar un libro especial o fichero, que tendrá todas sus hojas numeradas y rubricadas...»

Sr. Dickmann (A.). — ¿Cómo va a tener un fichero hojas numeradas y rubricadas?

Sr. Bunge. — Las fichas pueden ser numeradas perfectamente bien. Es indispensable que lo sean. Al imprimir las pueden ser selladas mecánicamente por el Departamento del Trabajo. Es más seguro y conveniente.

Sr. Presidente (López). — Se va a votar el agregado del señor diputado Bunge.

Sr. Ruggieri. — Debe votarse el agregado, sin modificar la redacción ya votada.

Sr. Bunge. — Sí, pero ha habido que leer el artículo para que se entienda.

Sr. Pena. — En lugar de libros el señor diputado propone un fichero de hojas movibles, que a diferencia de un libro perfectamente compaginado y rubricado permite alteraciones.

Sr. Presidente (López). — El despacho de la comisión ya se ha votado. Se va a votar el agregado propuesto por el señor diputado Bunge.

Sr. Bunge. — Exigir un libro, señores diputados, en esta época es creer, como los escribanos, que las escrituras tienen que ser manuscritas.

Sr. Giusti. — Y con pluma de ganso. (*Risas*).

Sr. Maglione. — Pido la palabra.

No voy a votar el agregado que propone el señor diputado, porque un libro en el que se llevan las constancias del personal, de sus sueldos y demás detalles, es una seguridad cuando es rubricado, sellado y firmado, mientras que un fichero es un casillero donde se colocan fichas en distinto orden, las que pueden extraviarse, perderse o secuestrarse.

Por otra parte, estamos incorporando al Código de Comercio disposiciones que formarán parte de él y el sis-

tema impuesto por dicho código a los comerciantes es el de libros y no tenemos por qué variar ese sistema, que tan buen resultado nos ha dado en la práctica.

Por eso, señor presidente, voy a votar en contra del agregado propuesto al despacho de la comisión.

Sr. Bunge. — El sistema tiene sesenta años.

Sr. Presidente (López). — Se va a votar el agregado propuesto por el señor diputado Bunge.

—Resulta negativa.

Sr. Ruggieri. — La última parte del artículo ha sido votada en la forma que había propuesto la comisión.

Sr. Presidente (López). — Sí, señor diputado; como lo propuso la comisión.

—En discusión el artículo 3º.

Sr. Ruggieri. — Pido la palabra.

Corresponde también en este artículo substituir las palabras «esta ley», por las siguientes : «los artículos 155, 156, 157 y 158». Porque esta disposición se incorpora al Código de Comercio, y no se puede hablar de «esta ley» sino de los artículos del código.

Sr. Bunge. — Pido la palabra.

Por esta disposición se autoriza a los empleadores para substituir las obligaciones impuestas por la ley por un seguro constituido a favor de los empleados que ocupan; pero dice el artículo «en compañías autorizadas por el Poder Ejecutivo nacional para esta clase de operaciones». Entiendo que debe decir «en compañías o asociaciones mutuas». Las asociaciones mutuas son las entidades que podrían hacer empíricamente el seguro de riesgos que no son calculables con anticipación.

Sr. Ruggieri. — No hay inconveniente. Aceptamos.

Sr. Dickmann (A.). — En la sesión de ayer ha quedado bien aclarado que serían las asociaciones mutuas de los comerciantes las que podrían con más razón tomar a su cargo estos riesgos...

Sr. Bunge. — Es lo que digo.

Sr. Dickmann (A.). — De manera que adhiero a la proposición del señor diputado.

Sr. Presidente (López). — Se va a votar el despacho de la comisión con la corrección introducida por ésta y con el agregado propuesto por el señor diputado Bunge, que la comisión acepta.

—Se vota y resulta afirmativa, quedando el artículo aprobado en la siguiente forma:

Art. 3º — Los empleadores podrán substituir las obligaciones impuestas en los artículos 155, 156, 157 y 158 por un seguro constituido a favor de los empleados que ocupan, sin afectar las acciones directas de éstos contra sus principales, en compañías o asociaciones mutuas autorizadas por el Poder Ejecutivo nacional para esta clase de operaciones.

—En discusión el artículo 4º.

Sr. Aráoz (J. I.). — Pido la palabra.

A pesar del estudio completo que ha hecho la comisión, quiero expresar mi opinión sobre este punto.

El artículo en discusión prescribe que todas las acciones derivadas del contrato de empleo se regirán por el procedimiento establecido por la ley de accidentes del trabajo. La comisión ha olvidado, desde luego, que las acciones derivadas del contrato de empleo son más complejas que las indemnizaciones de tantos meses de sueldo previstas por aquella ley. Estos contratos de empleo pueden implicar la reclamación de cientos de miles de pesos y sería ridículo someterlas al mismo procedimiento establecido para las acciones derivadas de accidentes del trabajo, en que suprimen términos para la contestación de la demanda, términos de prueba y hasta, a veces, el derecho de apelación.

Yo propondría a la comisión que acepte este agregado: «en los casos y límites de los servicios especiales establecidos por esta ley». Así no habría inconveniente, porque si se trata de la

acción para cobrar la indemnización por el despido o el preaviso, entonces está bien que el juicio termine rápidamente. Pero establecido en forma general, resulta una enormidad, a mi modo de ver.

Sr. Courel. — Pido la palabra.

Creo, señor presidente, que la observación formulada por el señor diputado por Tucumán, será satisfecha con dos palabras que voy a decir en nombre de la comisión.

Este inciso ha sido introducido a pedido del bloque demócrata nacional a que pertenece el señor diputado, como así también, a pedido del bloque socialista independiente, del antipersonalista y del propio sector socialista. El propósito de la comisión ha sido establecer que el trámite de esos juicios ha de ser sumario, rápido, saliendo del procedimiento ordinario, común, que dilata, que alarga, y que desde luego haría ineficaz en absoluto cualquiera de las disposiciones de la ley. Lo que se ha querido es terminar la cuestión en litigio cuanto antes, estableciendo, precisamente, que se hará bajo procedimiento sumario.

Sr. Aráoz (J. I.). — Estoy conforme con el señor diputado. El artículo dice: las acciones derivadas del contrato de empleo, en términos generales. Se podría crear, entonces, una situación complicadísima, porque incluiría contratos por miles de pesos. Con el agregado que propongo quedaría subsanado.

Sr. Ruggieri. — Podría decir: «las acciones derivadas de esta ley», etcétera.

Sr. Aráoz (J. I.). — Más claro quedaría con el agregado que yo propongo.

Sr. Ruggieri. — Este artículo no formaría parte del Código de Comercio.

Sr. Aráoz (J. I.). — Mi agregado sería: «las acciones derivadas del contrato de empleo se regirán por el procedimiento establecido para la de indemnización por accidentes del trabajo, en los casos y límites de los beneficios especiales establecidos por esta ley».

Sr. Martínez (J. H.). — Pido la palabra.

Yo le hallo razón al señor diputado por Tucumán.

La comisión, con muy buen criterio, ha querido establecer un procedimiento sencillo y rápido para resolver estas relaciones de trabajo, lo que se refiere al contrato de empleados, y ha tenido en cuenta, especialmente, los pequeños sueldos, las pequeñas indemnizaciones que están limitadas además en su monto; pero el señor diputado por Tucumán hace presente a la Cámara, que en la forma genérica que se ha establecido de «acciones derivadas del contrato de empleo», mañana podría tratarse de empleos de alta importancia, de gerentes, de administradores de grandes industrias, y entonces este procedimiento que ha sido creado con la intención especial de no dilatar las soluciones de la gente que necesita con urgencia sus recursos, puede prestarse a que las empresas no tengan las defensas necesarias con contratos de mucha importancia y valor individual en sí.

Por lo tanto, el señor diputado por Tucumán quiere establecer un distinguo: que cuando se refiera el contrato a los sueldos menores rija esta disposición, y que en los casos distintos se apliquen no más las normas del derecho común.

Sr. Ruggieri. — Creo que se llenaría el propósito del señor diputado, dando a este artículo, que podría también incorporarse al Código de Comercio como inciso *d*) del artículo 160, la siguiente redacción: «Las acciones derivadas de la aplicación de los artículos 155 a 160», etcétera.

Varios señores diputados. — Aceptado.

Sr. Presidente (López). — Se va a votar el despacho de la comisión, en la forma aceptada por la misma.

— Resulta afirmativa.

— Queda aprobado el artículo 4º, en la siguiente forma:

Las acciones derivadas de la aplicación de los artículos 155 a 160 se regirán por el pro-

cedimiento establecido para las de indemnización por accidente del trabajo; excepto en los casos de divergencia causada por rebaja de la remuneración del empleado, que se resolverán por arbitradores designados por las partes. Si los arbitradores disintieren en su fallo, las partes designarán un tercero, y no poniéndose de acuerdo en su nombramiento dictará sentencia en tal carácter el respectivo juez de comercio.

Sr. Presidente (López). — En consideración el artículo 5º.

Sr. Martínez (J. H.). — Pido la palabra para antes que se vote el artículo 6º, porque voy a proponer un artículo nuevo.

Sr. Bosano Ansaldo. — También pido la palabra en el mismo sentido.

— Sin observación se vota y aprueba el artículo 5º.

Sr. Presidente (López). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Martínez (J. H.). — Hemos votado con gran satisfacción esta ley que contempla la situación de los empleados de comercio, pero me parece que hay un grupo numeroso de empleados que merece también la preocupación y consideración del Honorable Congreso. Nos referimos a nuestros propios empleados, a los empleados de la Nación Argentina, a los empleados públicos. Si hay razones para que el despido sin causa de los empleados de comercio merezca una indemnización, no puede haberlas para que los empleados públicos, que muchas veces son víctimas exclusivamente de la pasión política, no tengan ningún amparo. (*Muy bien!*)

No creo que se necesite discurso para fundar la proposición que voy a someter a la consideración de mis honorables colegas, que consiste en lo siguiente: «En caso de despido de empleados públicos por causas no imputables a los mismos, el Poder Ejecutivo abonará un medio sueldo por cada año de servicio prestado, hasta un máximo de cinco años y 500 pesos por año como máximo y siempre que el emplea-

do no pueda gozar de los beneficios otorgados por las leyes de jubilaciones.»

Sr. Iribarne. — Estamos tratando una reforma al Código de Comercio.

Sr. Martínez (J. H.). — Me hago cargo de la objeción de que estamos tratando reformas al Código de Comercio. Es una objeción sin fundamento, porque ésta es una ley cuyo artículo 1º modifica tales y cuales artículos del Código de Comercio y sus artículos 2º y 3º pueden referirse a la situación de los empleados públicos. De manera que no hay ningún inconveniente, en cuanto a la técnica legislativa, en que la Cámara acepte mi proposición.

Sr. Presidente (López). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Bosano Ansaldo. — Me iba a referir a otro aspecto de esta ley y no a la proposición que ha formulado el señor diputado por Córdoba.

Sr. Contte. — Pido la palabra.

Me parece muy plausible la indicación que ha hecho el señor diputado por Córdoba de contemplar la situación de los empleados públicos. Pero la Cámara está discutiendo en este momento una cuestión que se relaciona especialmente con los empleados de comercio.

La proposición que ha formulado el señor diputado por Córdoba comprende a todos los empleados de la administración pública. Si se redujera exclusivamente a los empleados de la administración...

Sr. Martínez (J. H.). — De la administración nacional.

Sr. Contte. — Sí, señor diputado. ... de la administración pública nacional en las ramas que el poder público pueda tener empleados para asuntos que caigan dentro del régimen de la ley comercial, sería explicable la proposición del señor diputado; pero en un orden general me parece absolutamente inconveniente. Caeríamos en el mismo error en que incurrió la Cámara cuando, como un injerto inadecuado e inconveniente en la ley de presupuesto, estableció en el artículo 8º disposiciones que se refieren a leyes de

carácter permanente, como la de jubilaciones, que ha motivado después en el Congreso una larga discusión, que hasta la fecha no ha sido definitivamente solucionado.

Por eso, sin oponerme a la idea, que la encuentro muy plausible, creo que la proposición del señor diputado por Córdoba podría ser motivo de una legislación especial, y que en todo caso siguiera el trámite que corresponde a todos los asuntos de esta naturaleza, es decir, pasar a la comisión respectiva para que ésta haga un estudio serio y detenido al respecto.

Sr. Pena. — Pido la palabra.

Deseo saber si el señor diputado por Córdoba insiste, después de las palabras que acaba de oír, en que la Cámara considere sobre tablas la proposición que él ha hecho.

Sr. Martínez (J. H.). — Evidentemente.

Sr. Pena. — Confieso, señores diputados, que la cuestión que plantea el señor diputado por Córdoba toma totalmente de improviso a la Cámara, porque hemos estado tratando en dos largas sesiones, después de haberse iniciado la discusión de este asunto hace una semana o dos, una reforma al Código de Comercio y el señor diputado propone un agregado que en ningún momento ha asomado ni como idea planteada en la discusión en general y que no ha podido en ningún momento pensarse en que fuera compatible o que pudiera incorporarse a esta cuestión que estamos tratando ahora.

Tanto nos toma de sorpresa la proposición del señor diputado, que dentro de nuestro propio sector las opiniones son encontradas. Debe comprenderlo el señor diputado. Yo no podría arrogarme el derecho de hablar en nombre de nuestro sector porque las opiniones — ya que la cuestión es tan extraña y nueva — están divididas.

Por eso el señor diputado comprenderá que la manera prudente de que este asunto termine ahora es excluir la cuestión que plantea el señor diputado, que por su importancia y alcance debe ser tratada en una ley especial.

Se refiere a empleados cuyo sueldo vota el Congreso y cuya situación debe ser considerada, habiendo ya varias iniciativas, desde hace muchos años, sobre escalafón y estabilidad de esos empleados.

El señor diputado plantea el asunto en la discusión en particular de esta ley; sin que se haya expresado en toda la larga discusión realizada ningún concepto con respecto al asunto; y comprenderá el señor diputado que lo que va a conseguir es perturbar la sanción de esta ley sin obtener lo que persigue, que debe ser realizado en una forma más orgánica y más completa, para resolver una cantidad de cuestiones que el Congreso debe contemplar. Si diéramos una solución parcial, como propone el señor diputado, quedarían pendientes las otras cuestiones que reclaman solución del Congreso.

Por eso ruego al señor diputado comprenda que no es pertinente en este momento la cuestión que plantea y acepte que el asunto pase a comisión, para que pueda ser considerado en condiciones más normales y reglamentarias, ya que los diversos aspectos que deben ser contemplados no pueden estar comprendidos en una disposición agregada a la ley sobre empleados de comercio.

Sr. Giusti. — Pido la palabra.

Voy a decir muy pocas.

No entro a discutir si conviene, o no, que votemos ahora, la proposición que acaba de hacer el señor diputado por Córdoba. Probablemente lo mejor será que pase a la Comisión de Presupuesto, por el hecho, si no hubiera otras razones, de que ella importa gastos; pero es evidente — y esto hay que decirlo con entera franqueza — que el Estado no tiene autoridad moral para imponer a los particulares la ley que acabamos de votar, y a la cual he prestado con mucho placer mi voto, cuando todavía puede despedir caprichosamente a sus empleados, no sólo por razones de economía sino simplemente por represalias o venganzas de carácter personal o político. Empleados de 20 ó 25 años de servicio pueden todavía ser echados

a la calle en los ministerios, sin motivo suficiente, por razones de mejor servicio, nada más que respondiendo a venganzas subalternas de caudillos o de otros empleados.

Entonces, para tener nosotros toda la autoridad moral necesaria para dictar una ley como la que hemos sancionado, debemos muy pronto considerar y sancionar una ley de estabilidad de los empleados públicos.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*).

Sr. Solari. — Pido la palabra.

Apreciamos el plausible propósito que inspira al señor diputado por Córdoba al proponer como un nuevo artículo de este proyecto la iniciativa que nos somete.

Se me ocurren dos observaciones que formularé brevemente. Una es de forma: la ley que dictamos reforma artículos del Código de Comercio, que la misma determina, y, según entiendo, esos artículos no se refieren para nada a los empleados.

Por otra parte, la indicación propuesta es de tal importancia, que bien vale la pena que ella sea llevada a comisión, para analizar y estudiar la base financiera sobre la que se va asentar esta reforma realmente trascendental de las costumbres burocráticas de nuestro país.

Es una seria preocupación socialista ésta de defender y amparar los derechos y situación de los empleados públicos, de los agentes de la administración nacional, elementos de primer orden en la vida del Estado. No todos son burócratas ineptos u holgazanes; hay millares de útiles servidores de la Nación, cuya suerte nos ha preocupado siempre, en todo momento.

En nuestra plataforma electoral, desde la iniciación socialista en la política argentina y en nuestra acción parlamentaria, hemos tenido constantemente en cuenta la situación de esos hombres y para confirmarlo yo deseo hacer a título personal una referencia a la Honorable Cámara.

Estoy estudiando en este momento un proyecto de estabilidad, un estatuto del empleado público, en el que contemplo, precisamente, la cuestión que plantea el señor diputado por Córdoba. Sé que hay varias iniciativas en este sentido, algunas buenas, otras a mi juicio insuficientes o incompletas. Hemos tenido en cuenta la situación de los empleados víctimas de las combinaciones electoralistas de los malos gobiernos, víctimas siempre expiatorias de la subalterna politiquería de comité. Porque el empleado público argentino, señor presidente, es siempre un elemento que no se tiene en cuenta en lo que respecta a su eficiencia de servidor del Estado; se lo tiene en menos cuando no sirve las inspiraciones de los caudillos o de los hombres vinculados al oficialismo.

En el proyecto que estudio y que espero someter pronto a la consideración del grupo socialista para que me autorice su presentación, establezco que cuando por las llamadas razones de economía, de mejor servicio, o por causas que no le sean imputables, fuese suprimido un empleo y la persona que lo desempeñaba no acepta su traslado a otro de inferior categoría o sueldo, quedará en disponibilidad con los siguientes derechos: volver a ocupar un empleo de igual categoría en la administración sin necesidad de cumplir nuevamente lo dispuesto en el proyecto, que establece el concurso como condición *sine qua non*; y éste es el punto que coincide en lo fundamental con la iniciativa del señor diputado: percibir del tesoro nacional durante seis meses la mitad del sueldo de que gozaba, si tuviera una antigüedad de más de cinco años consecutivos en la administración y durante dos, si desempeñó el cargo menos tiempo.

Es, pues, una preocupación que me felicito exista en otros sectores de la Cámara, y yo rogaría al señor diputado autor de la iniciativa que no insistiera en que este asunto, delicado e importante, porque impone erogaciones, se considere sobre tablas. Debe tomarse en cuenta esa iniciativa, cuyo

propósito plausible reconocemos y la Honorable Cámara tendrá que ebocarse de una buena vez a la defensa de los intereses de los empleados útiles y eficaces de la administración argentina, dictando la ley de estabilidad que hace tantos años reclaman.

Sr. Martínez (J. H.). — Pido la palabra.

El señor diputado por la Capital señor Pena ha calificado de impertinente mi proposición en este momento. Quiero hacerle notar la pertinencia de la misma, ya que estamos legislando sobre el régimen del despido. Como lo ha dicho muy bien el señor diputado por la Capital doctor Giusti, careceríamos de autoridad moral para imponer a los otros lo que no somos capaces de aplicar nosotros mismos cuando hacemos de patrones. Por eso tiene mi proposición un nexo indestructible con el proyecto de ley que ha sancionado la Honorable Cámara.

Por otra parte, mi proposición no acuerda beneficios exagerados. He tomado lo que la Honorable Cámara ha sancionado como máximo para los empleados de comercio. Por eso he limitado al medio sueldo por año la compensación del despido; he establecido que no puede exceder de un máximo de 500 pesos, para que no se pueda creer que propiciaba las indemnizaciones para los altos funcionarios; he reducido por último a 5 años el monto de la misma y todavía he tomado en cuenta que existen leyes de jubilaciones a las cuales se acogen obligatoriamente los empleados nacionales y que consideran la situación de un empleado que ha estado un cierto y determinado número de años para poder retirarse dentro de las distintas disposiciones de la ley.

De modo que no es una cosa improvisada ni fantástica, ni algo que pueda tomar de sorpresa. Tampoco puede ser una carga exagerada para la Nación, porque si alguna cosa debe haber es estabilidad para el empleado público.

Estamos, desde tiempo atrás, con esta situación, que se va a dictar la ley

de estabilidad del empleado, que se va a crear el estatuto del empleado público. Existen iniciativas y proyectos en este sentido, que jamás se concretan en algo práctico y real. Entretanto, ¿qué pasa? Que, desgraciadamente, la vieja fórmula americana de que «al vencedor los despojos», se puede aplicar, sin ninguna clemencia. La peor administración es la del Estado, por la inestabilidad de los mismos funcionarios, y cuando se proyecta una iniciativa como ésta, ella encuentra resistencia a sancionarla por razones que yo soy el primero en apreciar y comprender.

Por eso, no voy a insistir en este momento en mi proposición. Me basta que un diputado, y diputado serio, haga objeciones en el sentido de que no ha estudiado un asunto para diferir el pedido de que se trate inmediatamente ese asunto, pero yo comprometo, en cambio, la voluntad de estos señores diputados de que esta iniciativa, u otra semejante que la mejore, sea convertida en ley antes de que terminen las sesiones ordiarias del presente período.

En ese sentido, pido que mi proposición pase como proyecto de ley a la respectiva comisión. (*¡Muy bien!*).

Sr. Presidente (Bunge). — La Presidencia necesita consultar a la Cámara sobre la comisión a que correspondería destinar este proyecto.

De acuerdo con el reglamento, corresponde que el asunto pase a la Comisión de Presupuesto, por tratarse de un gasto; pero, como, también, el proyecto se refiere a un régimen del empleado público, la Presidencia entiende que debe pasar, conjuntamente, a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General.

Si no hay objeción, se hará en esa forma.

—Asentimiento.

Sr. Bosano Ansaldo. — Pido la palabra.

Deseo proponer un agregado, que creo de utilidad e importancia para la aplicación de la ley.

Se refiere a que los empleados, que tengan que recurrir a los tribunales para ejercitar el derecho que les acuerda esta ley, sean facultados para actuar en papel simple, es decir, tengan la misma ventaja que se acuerda a los actores en la ley de indemnización por accidentes del trabajo.

El fundamento de mi pedido radica en que la situación económica de los empleados modestos, que son la mayoría de los que resultarán beneficiados, debe ser contemplada por la sanción que con tanto acierto se ha hecho en la sesión de hoy.

Los empleados, en idéntica condición que los obreros, cuando recurren a los tribunales, tropiezan con el grave inconveniente, muchas veces insalvable, de su carencia de recursos para poder hacer frente a los gastos que demanda la interposición de toda reclamación judicial. De no aceptarse mi proposición, sin ningún empacho, declaro ante la Cámara que gran parte de los beneficios que ahora se han acordado, quedarán reducidos casi a una proporción insignificante, puesto que, como dije al principio, la mayoría de los empleados son gente modesta que no podrá recurrir a la justicia por carecer de recursos.

Me permito, entonces, proponer este agregado para que se autorice a los actores a actuar en papel simple en todas las reclamaciones judiciales que interpongan.

Sr. Presidente (Bunge). — ¿La comisión acepta?

Sr. Ruggieri. — No es posible consultar la opinión de todos los miembros de la comisión; personalmente, acepto la proposición del señor diputado, inspirada en un propósito generoso y que contempla la situación económica real de los empleados de comercio.

Podría agregarse al artículo 4º del despacho que hemos incorporado al Código de Comercio, como inciso d) del artículo 160, las siguientes palabras: «En esa clase de juicios los empleados gozarán del beneficio de pobreza».

Sr. de la Vega. — ¿Por qué no, todos los que sean parte en esta clase

de juicios? Creo que no hay derecho de establecer la distinción.

Sr. Bosano Ansaldo. — Es por la misma razón que hubo para establecer esto en la ley de accidentes del trabajo.

Sr. Ruggieri. — Así es. ¿Cómo se va a otorgar este beneficio a una empresa mercantil, a una compañía de seguros, a una sociedad anónima?

Sr. Uriburu. — Pueden estar en las peores condiciones económicas.

Sr. Ruggieri. — No tanto como para no poder pagar el sellado de actuaciones breves.

Sr. Bosano Ansaldo. — Si se pusiera para el empleador, no tendría razón de ser para el empleado. El fundamento que le da valor a mi petición es la carencia de recursos del empleado. Si este beneficio lo damos también al empleador, no tiene razón de ser, puesto que éste no está en esas condiciones.

Sr. de la Vega. — Yo no hago cuestión. Formulé la observación, al pasar, porque me parece que el principio debe ser para todos los litigantes.

Sr. Ruggieri. — Hay que establecer el beneficio para los empleados y sus derechohabientes.

Sr. Bosano Ansaldo. — Me parece que la forma propuesta por el señor diputado, «gozarán del beneficio de pobreza», es denigrante...

Sr. Ruggieri. — Es la expresión adecuada.

Sr. Bosano Ansaldo. — Se podría poner lo siguiente: «En esta clase de juicios los actores actuarán en papel simple», y evitamos el empleo de esa palabra tan poco agradable.

Sr. Ruggieri. — No hagamos cuestión de palabras. Respetemos el léxico corriente en la legislación argentina. Cuando se habla del beneficio de pobreza no se denigra a los que necesitan las ventajas judiciales que supone esa carta de pobreza.

Sr. Castiñeiras. — Por otra parte, no es nada indecoroso ser pobre, en ésta ni en ninguna otra época.

Sr. Presidente (Bunge). — ¿Acepta el señor diputado por Santa Fe la forma propuesta por el señor diputado

por la Capital, o insiste en la que ha propuesto?

Sr. Bosano Ansaldo. — Voy a concretar mi proposición en los siguientes términos: «Los empleados que se vean precisados a recurrir a la justicia para reclamar los derechos que les acuerda esta ley, podrán hacerlo en papel simple.»

Sr. Dickmann (A.). — ¿Por qué «podrán»? ¿Por qué no dice «lo harán»?

Sr. Presidente (Bunge). — Se van a leer por su orden las dos formas del agregado propuesto.

Sr. Secretario (González Bonorino). — La proposición del señor diputado Bosano Ansaldo es la siguiente: «Los empleados que se vean precisados a recurrir a la justicia por esta ley, podrán hacerlo en papel simple».

La del señor diputado Ruggieri:

«En esta clase de juicios los empleados o sus derechohabientes gozarán del beneficio de pobreza».

Sr. Oddone. — Se podrían refundir las dos proposiciones.

Sr. Ruggieri. — La relación que he propuesto es más amplia; no contempla exclusivamente el beneficio para actuar en papel común; importa también las demás liberalidades que conceden, para estos casos, las leyes vigentes.

Sr. Bosano Ansaldo. — Yo no tengo interés en que triunfe mi proposición. Lo que he querido es establecer ese beneficio en la ley y me es indiferente una u otra redacción.

Sr. Presidente (Bunge). — ¿Acepta, entonces, la proposición del señor diputado por la Capital?

Sr. Bosano Ansaldo. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Bunge). — Se va a votar el agregado en la forma propuesta por el señor diputado por la Capital y que ha leído la Secretaría.

—Se vota, y resulta afirmativa.

—El artículo 6º es de forma.

Sr. Presidente (Bunge). — Queda sancionado el despacho.

Sr. Pena. — Hay que poner al final

el artículo de la antigüedad, según se resolvió, y autorizar a la Presidencia, según se resolvió ayer y se ha repetido hoy, para que individualice los apartados colocándoles las letras correspondientes.

Sr. Presidente (Bunge). — Así se hará.

8

MOCION

Sr. Pueyrredón. — Pido la palabra para proponer una moción de orden.

En el mes de Julio presenté con el señor diputado Ruiz Guiñazú, un proyecto de prórroga de los vencimientos hipotecarios, que pasó a estudio de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Tengo entendido que los miembros de la Comisión de Presupuesto han convenido con los de la de Legislación General que el proyecto pase a esta última comisión.

Sr. Martínez (J. H.). — La comisión de Presupuesto y Hacienda se encuentra suficientemente capacitada para estudiar y despachar todos los asuntos que le han sido encomendados.

Sr. Dickmann (A.). — Como hoy estaba ausente el señor diputado, creo que va a incurrir en un error que quiero evitarle.

En la reunión de hoy la Comisión de Presupuesto y Hacienda resolvió que ese proyecto pasara a la Comisión de Legislación General porque en ésta hay un proyecto análogo. Por eso apoyaremos la moción del señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Martínez (J. H.). — La comisión habrá resuelto una cosa que no está dentro de sus facultades. Respetando las razones que hayan tenido mis colegas de la comisión, yo entiendo que si la Honorable Cámara se ha dado un reglamento que establece normas con arreglo a las cuales debemos deliberar y tratar todos los asuntos, debemos respetar ese reglamento.

Si se han creado las comisiones necesarias no hay porqué — salvo cuando se trate de asuntos de gran tras-

cendencia o de una extrema dificultad — alterar ese régimen normal, máxime cuando la Comisión de Presupuesto y Hacienda es bastante numerosa — se compone de diecinueve miembros —, en la cual tienen asiento los representantes de todos los sectores políticos y no creo que para resolver ese asunto se necesite reunir un pequeño congreso.

Me opongo al procedimiento que este año se ha seguido en la Cámara, y que ha desvirtuado un tanto el reglamento, de pasar asuntos que corresponden específicamente a una comisión, a otra, fusión de comisiones distintas para asuntos que no ofrecen mayores dificultades. Es en realidad entorpecer la labor legislativa. Es más fácil que un asunto se despache por una comisión que quiera trabajar, que por dos o tres juntas. Se altera así este principio elemental de nuestro sistema parlamentario del trabajo en comisiones. Para hacer pequeños congresos, vengamos al trabajo en comisión en el seno mismo de la Cámara.

Sr. Presidente (Bunge). — Cree la Presidencia pertinente que se dé lectura del artículo del reglamento que ha invocado el señor diputado.

Sr. de la Vega. — Pido la palabra.

Deseo recordar un antecedente. Sobre esta materia de prórroga de hipotecas hay dos iniciativas. Una de carácter más general ha ido a estudio de la Comisión de Legislación General; otra, que es a la que se refiere el señor diputado Pueyrredón, fué a la Comisión de Presupuesto y Hacienda únicamente en atención a que existía un artículo en el proyecto del señor diputado en virtud del cual se establecían disposiciones especiales respecto del pago de las comisiones por el Banco Hipotecario Nacional y por el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

En la reunión de hoy la Comisión de Presupuesto, teniendo en cuenta que en lo referente a las hipotecas del Banco Hipotecario ha producido un dictamen que ha motivado la sanción de la Honorable Cámara y que se encuentra actualmente a la consideración del Honorable Senado, ha entendido que no le correspondía tomar de inmediato el